

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO**

**GRADO EN DERECHO
TRABAJO FIN DE GRADO**

**LOS PERMISOS DE SALIDA
ORDINARIOS PENITENCIARIOS:
UNA REVISIÓN CRÍTICA**

Alumno: [Noelia Vázquez Aguiar]

Tutor: [Raquel Benito López]

Curso académico: 2019/2020

Fecha de entrega: [Mayo, 2020]

ABREVIATURAS

AP	Audiencia Provincial
CC	Código Civil
CCP	Tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares
CE	Constitución Española
CP	Código Penal
DGIP	Dirección General de Instituciones Penitenciarias
Ed.	Editorial
JVP	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
LOGP	Ley Orgánica General Penitenciaria
Núm.	Número
Ob.cit.	Obra citada
p./pp.	Página/páginas
RD	Real Decreto
RP	Reglamento Penitenciario
RSP	Reglamento de los Servicios de Prisiones
SGIP	Secretaría General Instituciones Penitenciarias
STC	Sentencia Del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia Del Tribunal Supremo
TC	Tribunal Constitucional
TS	Tribunal Supremo
TVR	Tabla De Variables de Riesgo

ÍNDICE DE CONTENIDO

ABREVIATURAS.....	1
1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. ANTECEDENTES.....	6
2.1 Antecedentes históricos.....	6
2.1.1 En Europa.....	6
2.1.2 En España.....	7
2.1.1.1 Primer antecedente histórico: El coronel Montesinos.....	7
2.1.2.2 Segundo antecedente histórico: Victoria Kent.....	8
2.2 Antecedentes legislativos.....	9
2.2.1 En el ámbito internacional.....	9
2.2.2 En España.....	11
3. FINALIDAD Y NATURALEZA JURÍDICA.....	14
4. MODALIDADES.....	16
4.1 Permisos de salida ordinarios.....	16
4.1.1 Regulación.....	17
4.1.2 Requisitos para su concesión.....	17
a) Clasificación en segundo o tercer grado de tratamiento.....	17
b) Extinguir una cuarta parte de la condena.....	23
c) Observar buena conducta.....	28
d) Informe preceptivo del equipo técnico.....	29

4.1.3 Duración.....	30
4.1.4 Procedimiento de concesión.....	32
4.1.5. Instrumentos de predicción del riesgo.....	33
a) Tabla de Variables de Riesgo.....	34
b) Tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares.....	35
5. CONCLUSIONES.....	37
6. BIBLIOGRAFIA.....	40
ANEXO (REFERENCIAS NORMATIVAS, JURISPRUDENCIALES Y PAGINAS WEB).....	43

1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de fin de grado, pretendo analizar las cuestiones teóricas y prácticas que afectan a los permisos de salida penitenciarios. Dicho análisis ha sido realizado mediante la búsqueda y el estudio de la doctrina emitida por diversos autores, la normativa, así como la jurisprudencia dictada al respecto. El principal objetivo es descubrir la finalidad para la cual fueron creados dichos permisos, y con ello su importancia.

Si bien es cierto que a día de hoy existen dos modalidades de estos permisos: la ordinaria y la extraordinaria, voy a centrar todo el objeto de estudio en la primera.

Para ello, voy a comenzar con un pequeño recorrido histórico desde la aparición de las primeras evidencias de estos permisos hasta la actualidad, tanto en el ámbito internacional, como nacional, -que es en el que nos centraremos-.

Analizaré, entre otras cuestiones, los requisitos para su concesión, ya que es el punto principal de conflicto. Aquí daré respuesta a tópicos como: ‘¿Ayudaría o perjudicaría otorgárselos a penados por delitos de terrorismo?’, ‘¿Qué ocurre en el caso de condenados a Prisión Permanente Revisable?’, ‘¿Qué tratamiento merecen los presos preventivos o los condenados, pero aún no clasificados debido a la incertidumbre que acarrea?’, ‘¿Cómo se debe actuar con respecto a los extranjeros?’. También, trataré la problemática que presenta la manifiesta subjetividad de los instrumentos de prevención del riesgo.

Todo este trabajo está enfocado hacia la envergadura que presentan los fenómenos de reeducación, resocialización, y, consecuentemente, la reinserción. Se destaca en todo momento la trascendencia del respeto a los Derechos Fundamentales, y de los límites infranqueables de nuestro ordenamiento, ya que como decía el escritor Fiódor Dostoyevski: *‘El grado de civilización de una sociedad, se mide por el trato a sus presos’*

La elección que he hecho en cuanto al tema ha sido gracias al gran interés que comporta para mí el Derecho Penal, y la importancia en la sociedad a día de hoy, en la que conviven valores como ‘justicia’, ‘castigo’, ‘ética’, ‘reeducación’, ‘dignidad humana’, por lo que es necesario la existencia de normas que impongan límites.

Profundizando más, el ámbito de Derecho Penitenciario, a pesar de la gran importancia que conlleva ligada, opino que está infravalorado. Ahora bien, sí es verdad que cada vez es más frecuente.

Tras mi paso por esta carrera, el Derecho Penal es la rama del ordenamiento jurídico que más interés me produce, y con ello, el ámbito del Derecho Penitenciario. Lo que me atrae de este campo son las bases ideológicas en las que se sustenta, caracterizadas por un tratamiento humanitario de los presos. Sin embargo, soy consciente de que no se puede obviar el hecho de que la práctica de esta disciplina contradice en algunos aspectos esta idea. Teniendo en cuenta esta consideración, mis argumentos se centrarán en la primera parte, en la consideración humanitaria de este campo, orientado hacia la concesión de segundas oportunidades, y hacia la creencia de que con un buen tratamiento y las correspondientes atenciones a cada individuo particular, se podría conseguir la reinserción. Busca reeducar a los penados sin basarse estrictamente en que los centros penitenciarios cumplan un fin punitivo, sino también brindarles la ayuda que necesitan. Por ello, se incide en las Instituciones de Gobierno, para la redacción y puesta en la práctica de regulaciones más compasivas, que tengan por finalidad la resocialización total, es decir, la ausencia de peligro tras la nueva toma de contacto con la sociedad del condenado. También veo importante destacar la relación que presenta el Derecho Penal (y en concreto el penitenciario) con otras ciencias, como pueden ser la psicología, la criminología o la sociología, por las cuales siento un profundo interés también.

Sin embargo, a pesar de lo recogido en el artículo 25.2 de la Constitución Española, en la práctica, nos encontramos con que no siempre se respetan los Derechos Fundamentales. Esto se refleja en prácticas tales como algunas de las interpretaciones que realiza el Tribunal Constitucional o el amplio margen de discrecionalidad del que goza el Administración Penitenciaria. Teniendo en cuenta lo expuesto, podría ser necesario profundizar en estos aspectos en futuras líneas de investigación incluso llegando a plantear un diseño para una posible modificación de las prácticas en el ámbito penitenciario.

A pesar de todo ello, teniendo en cuenta mi atracción hacia esta disciplina de una manera global, he sentido una enorme gratificación al realizar esta investigación.

2. ANTECEDENTES

En este apartado voy a hacer un recorrido por las premisas que a lo largo de los tiempos han dado lugar a la creación de los permisos de salida que conocemos hoy en día, tanto a nivel nacional como internacional.

2.1 Antecedentes históricos

A continuación, voy a hacer referencia a importantes figuras, las cuales propiciaron los primeros impulsos de la creación de estos permisos.

2.1.1 En Europa

Anterior a la creación normativa de los permisos penitenciarios, nos encontramos con antecedentes históricos de mucha más antigüedad.

Durante el siglo XIX, concretamente en Irlanda, de la mano de Sir Walter Crofton, en base a las resoluciones del *Congreso Internacional Penitenciario de Londres de 1872*¹, introdujo en los sistemas progresivos penitenciarios un periodo intermedio mucho menos riguroso entre el segundo -de convivencia- y la salida de prisión. Generalmente, esta novedad estaba basada en realizar tareas de trabajo durante el día y dormir en la prisión durante la noche. La función que se esperaba de implantar esto, era conseguir una integración progresiva con el fin de preparar al penado para vivir en la sociedad nuevamente.

Los sistemas penitenciarios de hoy en día en Europa se basan en esta idea de Crofton, aunque con modificaciones adaptadas al tiempo en el que nos encontramos.

También, en Alemania, gracias a Obermayer², quien en 1842 experimentó en la cárcel de Múnich con la implantación de un programa que estaba constituido por tres periodos, cuyo tercero, era un periodo de libertad anticipada enfocado a ayudar a la reincorporación de los internos a la vida en libertad.

Como vemos, estos modelos ya guardaban correlación con la finalidad de los permisos actualmente, la preparación para la vida en libertad.

¹ Fue aquí, donde el propio Crofton atribuyó la paternidad del sistema progresivo a Montesinos.

² GARRIDO GUZMÁN, L. (1983). *Manual de ciencia penitenciaria*, Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, Ed. Edersa, Madrid, p.135.

2.1.2 En España

Como nos ilustra Vega Alocén³, en España, que es el ámbito donde nos vamos a centrar, debemos agradecer la aparición de los permisos a dos figuras que marcaron unas pautas muy importantes en esta materia, como son el Coronel Montesinos, en el Presidio Correccional de Valencia (1834-1854), y Victoria Kent, quien ostentaba el cargo de Directora General de prisiones en la II República Española.

2.1.1.1 Primer antecedente histórico: El coronel Montesinos

En junio del año 1796, nace D. Manuel Montesinos, en el seno de una familia noble. Nos situamos en la época de la Guerra de la Independencia, donde es partícipe en varias batallas mientras ésta tiene lugar, hasta que en 1809 lo hacen prisionero obligándolo a cumplir cinco años de cautiverio en Francia. Tras esto regresa a España. En 1827, es destinado al Regimiento de Caballería Borbón, en Valencia, y es a partir del año 1830 y en ésta misma ciudad donde El coronel Montesinos, ostentaba el puesto de director del presidio.

Entre sus numerosas e importantes funciones se encontraba la potestad de autorizar la salida de los presos del presidio correccional de Valencia por diversos motivos, de manera que, si tenían un problema familiar grave, éste concedía los días necesarios para ausentarse.

Pero lo más importante eran otra serie de permisos que el concedía, a los cuales llamaba ‘las duras pruebas’, y eran una serie de salidas autorizadas durante el tercer periodo, denominado ‘libertad intermedia’⁴. Las cuales consistían en realizar algunas de estas gestiones, tales como llevar pliegos cerrados para los jefes, o servir de espías y observadores durante la guerra civil, realizar trabajos públicos dentro y fuera de la ciudad siendo acompañados solo por un capataz, o servir de escoltas para su mujer cuando iba a sus viajes para impedir que la atacasen bandidos, -como bien explica Salillas⁵-, parecía ser la mejor manera de comprobar si el sujeto ya estaba preparado para llevar a cabo una vida normal en libertad.

³ VEGA ALOCÉN, M. (2005). ‘*Los permisos de salida ordinarios*’, Ed. Comares, Granada, p.3.

⁴ Como podemos ver, esto es puro reflejo de un sistema progresivo. Consiste en un modo de ejecutar la pena, donde se atenúan las condiciones del aislamiento de manera que, la persona que ha sido privada de la libertad, a medida que transcurre el periodo va recuperando los derechos restringidos por la privación a la que ha sido sometido hasta que llega el periodo en el que está totalmente preparado para gozar en plenitud de estos.

⁵ SALILLAS, R. (1906). ‘*Un gran penólogo español, el Coronel Montesinos*’, Ed. Eduardo Arias, Madrid, p. 86.

La actividad de Montesinos fue gratamente admirada por el penitenciario inglés Mr. Hoskins, y por Don Rafael Salillas⁶, el cual apoya la idea de éste, de que la llamada ‘libertad intermedia’, eran simplemente las ‘duras pruebas’ a las que se sometían a los penados.

Montesinos era una persona de muy noble fondo, que confiaba plenamente en la reinserción y rehabilitación de los penados, hasta tal punto que en una ocasión permitió que un penado pudiera trasladarse a ver a su madre enferma, la cual murió pensando que su hijo estaba en libertad.

Me parece de real importancia destacar una de sus frases, de la cual quedará constancia para toda la eternidad, puesto que, a pesar del siglo en el que se encontraba, y el pensamiento general existente en esa época, vemos que presenta un cierto paralelismo con los principios y valores humanitarios que “ahora” reinan. Versa: *‘Perfeccionar al hombre es hacerlo más sociable: todo lo que tienda a destruir o entorpecer su sociabilidad, impedirá su mejoramiento. Por esto las penas, lejos de atacar deben favorecer este principio, fomentando su acrecentamiento. El objeto de los castigos no es la expiación del crimen sino la enmienda y aviso de los criminales, porque el oficio de la justicia no es vengar, sino corregir’*.⁷

Otro suceso que cabe destacar fue cuando el poeta Ramón Campoamor (Gobernador civil de Valencia) le requirió⁸, solicitando el envío de un recluso para combatir con el fin de lograr acabar con unos bandidos. Después de esto el penado debía volver al presidio, y así ocurrió.

2.1.2.2 Segundo antecedente histórico: Victoria Kent

Durante la Segunda República Española, Victoria Kent, Directora General de Prisiones (desde abril de 1931 a junio de 1932), autorizaba permisos por razones de excepcionalidad, teniendo en cuenta la conducta del recluso, sus circunstancias personales, y el informe del director de la prisión.

Era una mujer muy humanitaria, por ello se entiende el sentido de concesión de estos permisos, incluso a veces llegó a ofrecer como garantía su propia libertad si el penado no regresaba a prisión.⁹

⁶ RICO DE ESTASEN, J. (1956). *‘Un gran penitenciario español: el Coronel Montesinos’*, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias penales. p.467.

⁷ SANZ DELGADO, E. (2008). *‘Los orígenes del sistema penitenciario Español: Abadía y Montesinos’*, en: Marginalidad, cárcel, las ‘otras’ creencias: primeros desarrollos jurídicos de ‘La Pepa’. Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, Cádiz, p.134.

⁸ RICO DE ESTASEN. *‘Un gran penitenciario...’*, ob. cit. p.468.

Confiaba plenamente en la rehabilitación de estos sujetos, y como resultado a esto y respaldado por autores como Antonina Rodrigo¹⁰, Telo Núñez¹¹, o Gutiérrez Vega¹², afirmamos que ‘*ni uno de los reclusos que disfrutó de este permiso dejó de presentarse a la prisión en la fecha que le fue fijada*’¹³

De estos dos antecedentes históricos, sacamos la conclusión de que incluso antes de existir los permisos de libertad de hoy en día con su regulación, ya se acercaban a conceder una especie de éstos por motivos extraordinarios. En este caso se exceptuarían los concedidos por el coronel Montesinos, los cuales iban encaminados a preparar la vida en libertad de los reclusos.

2.2 Antecedentes legislativos

A lo largo de los años, los permisos de salida desde sus primeras apariciones, han experimentado una serie de cambios legislativos cuyo trayecto voy a explicar a continuación.

2.2.1. En el ámbito internacional

Desde el ámbito internacional, caben destacar las Reglas Mínimas sobre las que el Consejo de Europa¹⁴ adopta tres decisiones para el tratamiento de los reclusos, como nos explica García Blasco¹⁵. Éstas fueron elaboradas en 1955 por las Naciones Unidas. Primeramente, en la *Recomendación 195 (1959)*, la Asamblea Constitutiva aconseja al Comité de Ministros que sería conveniente que se realizase entre los Estados Miembros un intercambio de los directivos de las prisiones existentes en cada uno de ellos, con la finalidad de que se produjese el intercambio de información, y con ello, el estudio en la práctica del procedimiento de cada administración penitenciaria.

⁹ VEGA ALOCÉN. ‘*Los permisos...*’ ob. cit. p.7.

¹⁰ RODRIGO GARCÍA, A. (1988). ‘*Victoria Kent. Adelantada a la justicia*’, en *Revista Historia y vida*, no. 244, Barcelona, p.40.

¹¹ TELO NUÑEZ, M., ARENAL, C. y KENT, V. (1995). ‘*Las prisiones, vida y obra*’, Ed. Instituto de la mujer, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, p.66.

¹² GUTIÉRREZ VEGA, Z., y KENT, V. (2001). ‘*Una vida al servicio del humanismo liberal*’, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Ed. Thema, Málaga, p.95.

¹³ KENT, V. (1976). ‘*Victoria Kent: una experiencia penitenciaria*’ en *Revista Tiempo de Historia*, p.6.

¹⁴ El Consejo de Europa, se creó por acuerdo el 5 de mayo de 1949, y fue suscrito por varios países. Éstos fueron: Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Años más tarde, en 1957, se instaura un comité de expertos en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente: *La Comisión Europea de Problemas Criminales*.

¹⁵ GARCÍA BLASCO, J.C., (1977). ‘*Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos del Consejo de Europa*’, *REP*, núm. 216-219, DGIP, Madrid, pp.519-524.

En segundo lugar, el 1 de febrero de 1962, se aprueba en referencia con los derechos electorales, civiles y sociales de los reclusos y la necesidad de completar las reglas mínimas de las Naciones Unidas, *la Resolución 62(2)* por los delegados de los Ministros.

Y, en tercer lugar, en 1967, se crea la Subcomisión VIII, dentro de la Comisión Europea de Problemas Criminales para revisar con profundidad las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955.

Estas Reglas Mínimas se revisaron por el Comité de Ministros en la *Recomendación (73)5 de 19 de enero de 1973* sobre el conjunto de Normas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, la cual se recomendó a los gobiernos de los Estados Miembros para que incorporasen los principios de este conjunto de Reglas en sus legislaciones. Se estableció también, el mandato del envío de una serie de informes al Secretario General del Consejo de Europa cada cinco años. El objeto de que se procediese a dicha revisión radicaba en tareas tales como: favorecer los contactos entre los presos y la sociedad; flexibilizar las pautas de división de los presos; promover los métodos a través de los cuales éstos podían cooperar en su tratamiento; proteger vínculos con sus familiares, y cerciorarse de que este proceso de rehabilitación tenía lugar con la debida anticipación a su puesta en libertad, y por tanto, su nueva toma de contacto con la sociedad. Para ratificar y facilitar que esta serie de propósitos se llevaba a cabo, se organizaron dos conferencias bianuales de Directores Generales de Administraciones Penitenciarias, y se creó el Comité de Cooperación Penitenciaria.¹⁶

Más tarde surge la *Recomendación (82)16, de 24 de septiembre de 1982*, donde se destaca la importancia de los permisos al colaborar con el fin de humanizar las prisiones y favorecer la reinserción en la sociedad del penado. Además, es en el propio texto en el que se resalta la trascendencia de éstos, haciendo un llamamiento a los Gobiernos de los Estados para que: *‘concedan permisos de salida penitenciarios en la más amplia medida posible por motivos médicos, educativos, profesionales, familiares, y demás motivos sociales’*.¹⁷

Finalmente, la *Recomendación (87)3, de 12 de febrero de 1987*, sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, es el resultado de varias decisiones adoptadas por el Consejo de Europa, y, en consecuencia, se produjo una actualización de esas Reglas Mínimas. Está dirigida también a integrarse tanto en las legislaciones como en la práctica de los Estados

¹⁶ AYUSO VIVANCOS, A. (2011). *‘Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España’*, Ed. Nau Llibres, Madrid, p.31.

¹⁷ LEGANÉZ GÓMEZ, S. (2009). *‘Clasificación penitenciaria, permisos de salida y extranjeros en prisión: nuevo régimen jurídico’*, Ed. Dykinson, Madrid, pp.439-440.

Miembros. Presenta una estructura de cien reglas que se distribuyen en cinco partes: principios fundamentales; administración de los establecimientos penitenciarios; personal; objetivos del tratamiento y régimen y reglas complementarias aplicables a ciertas categorías de reclusos.¹⁸

En las Reglas 43.2 y 70.2 se articula lo relevante a los permisos de salida. Dichas Reglas consisten en defender la necesaria existencia de los permisos, con el propósito de adelantar los contactos con la sociedad nuevamente. Deben ser compatibles con los objetivos del tratamiento, poniendo de manifiesto que se deberá incluir en los programas de tratamientos una disposición correspondiente a los permisos penitenciarios, los cuales deberían otorgarse más libremente por razones médicas, educativas, profesionales, familiares, y otros motivos sociales, y en argumentar que los extranjeros no deberían ser excluidos de estos permisos.¹⁹

La última revisión de estas Reglas fue en el año 2015 y fueron renombradas como Reglas Mandela, en honor al Nelson Mandela en el año de su fallecimiento.

2.2.2 En España

El primer antecedente legislativo sobre permisos de salida que nos encontramos en España es el artículo 375.9 del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 2 de febrero de 1956, el cual versa: *‘Asimismo, el recluso debe ser informado de la muerte o de la enfermedad grave de un pariente próximo, y cuando las circunstancias lo permitan, el Director, siempre previa aprobación de la Dirección General podrá autorizarle a trasladarse a su lado, en el supuesto de enfermedad muy grave o defunción’*. Como vemos, es un primer acercamiento que tras modificaciones, dará lugar a lo que hoy conocemos como ‘los permisos’.

Bueno Arús²⁰ y Garrido Guzmán²¹ destacan el artículo 44.2 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (*‘Se informará al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente cercano. En caso de enfermedad grave de dicha persona, se le deberá autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia.’*), en el cual, si nos paramos a compararlo con el precepto

¹⁸ VEGA ALOCÉN. ‘Los permisos...’ ob. cit. pp.25-26.

¹⁹ En: https://www.guiasjuridicas.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIAAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUjU3MDtBLUouLM_DzbsMz01LySVADwS3sIIAAAAA==WKE Consultado el 25/04/2020.

²⁰ BUENO ARÚS, F. (1986). ‘Los permisos de salida y las competencias de los Jueces de Vigilancia’, III Reunión de JPV, Madrid, p.4.

²¹ GARRIDO GUZMÁN, L. (1989). ‘Los permisos penitenciarios’, REP extra 1, Madrid, p.90.

anterior, vemos que es prácticamente igual. Esto nos lleva a pensar que ya comenzaba a existir cierta cultura de ir encaminados hacia una labor más de resocialización y reeducación comenzando a poner por escrito en textos legales estas salidas.

La aparición de estos permisos, por tanto, como se muestra en algunos textos o recopilaciones²², podría ser gracias a la aparición de las Reglas Mínimas internacionales para el Tratamiento de Reclusos²³ - a las que nos hemos referido en el apartado anterior-, que fueron publicadas un año antes del referido Decreto, en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el cual tuvo lugar en Ginebra en 1955.

Este artículo 375.9 anteriormente mencionado, se reforma por Real Decreto 2273/1997 de 29 de julio, en el cual en su artículo 109, apartados c) y d),²⁴ versan acerca de conceder permisos de salida en domingos y festivos en un periodo de las once a las diecinueve horas para pasarlos con sus familias en donde se encuentre el establecimiento penitenciario. También se contemplan permisos de veinticuatro, cuarenta y ocho o setenta y dos horas o a veces incluso de una semana, para cualquiera que fuese el grado en el que se encontrase el recluso (salvo en el caso de estar en el primer grado de tratamiento, que no se permitiría superar las cuarenta y ocho horas).

Posterior a esto hubo una serie de circulares que continuaban mejorando esta regulación inicial.

En primer lugar, nos encontramos la Orden Circular de 13 de octubre de 1977, la cual completa la regulación del Reglamento. Más tarde la Orden Circular de 3 de febrero de 1978, en la que se da un paso atrás en lo avanzado en cuanto a estos derechos suspendiendo provisionalmente la concesión de éstos. Pero después de este retroceso, nos encontraríamos las Circulares de 21 de abril y 4 de octubre de 1978, las cuales derogan la anterior y lo que hicieron fue mejorar lo que contenía el Reglamento de los Servicios de Prisiones, y hacer efectiva su realización.

²² GÓMEZ LÓPEZ, MARÍA DEL ROSARIO y RODRIGUEZ MORO, L. (2015). '*Los permisos ordinarios de salida: antecedentes, regulación vigente y reflexiones críticas*', Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, no 19, A Coruña, p.395.

²³ Estas Reglas Mínimas, tenían como función ayudar en la mayor medida posible a superar las discrepancias en los distintos modelos penitenciarios, ya que eran unos mínimos que admitían las Naciones Unidas.

²⁴ RODRÍGUEZ ALONSO, A. (2003). '*Lecciones de Derecho Penitenciario*', Ed. Comares, Granada, p.328.

Todo ello, hasta llegar a nuestra actual Ley Orgánica General Penitenciaria, 1/1979, de 26 de septiembre de 1979²⁵, que recoge los permisos de salida dentro de la actividad reeducadora y resocializadora a la que la pena privativa de libertad debe dar lugar, encontrando apoyo en el artículo 25.2 de la Constitución Española.²⁶

Más tarde, se redactó el Reglamento Penitenciario de 1981, el cual desarrollaba la regulación que venía en la LOGP, y, posteriormente, en 1996 se mejoró estableciendo novedades que eran necesarias conforme al paso del tiempo. Esto dio lugar al vigente Reglamento Penitenciario de 1996.²⁷

Hay que tener en cuenta la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, la cual fue muy importante²⁸, ya que establece en el artículo 36.1 que estando condenado a prisión permanente revisable, para obtener un permiso de salida ordinario, deberán haber cumplido ocho efectivos años de prisión (como regla general), y doce si has sido condenado por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal.

Siendo fundamental también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, dada la importante relevancia que le da en jurisprudencia como:

‘STC 112/1996 de 24 de junio’²⁹, donde en su fundamento jurídico cuarto, afirma: ‘Todos los permisos cooperan potencialmente a la preparación de la vida en libertad del interno, pueden fortalecer los vínculos familiares, reducen las tensiones propias del internamiento y las consecuencias de la vida continuada en prisión, que siempre conlleva el subsiguiente alejamiento de la realidad diaria. Constituyen un estímulo a la buena conducta, a la creación de un sentido de responsabilidad del interno, y con ello, al desarrollo de su personalidad. Le proporciona información sobre el medio social en el que ha de integrarse, e indican cuál es la evolución del penado’.

O en la *‘STC 115/2003 de 16 de junio’³⁰, en la cual establece que, conceder estos permisos ‘se conecta con una de las finalidades esenciales de la pena privativa de libertad, cual es la*

²⁵ España. Ley 1/1979, de 26 de septiembre de 1979, General Penitenciaria. Boletín Oficial del Estado, 5 de octubre de 1979, núm. 239, pp. 23180-23186. De ahora en adelante ‘LOGP’

²⁶ Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424. De ahora en adelante, ‘CE’.

²⁷ España. Real Decreto-ley 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Boletín Oficial del Estado, de 15 de febrero de 1996, núm. 40, pp. 5380-5435. De ahora en adelante ‘RP’.

²⁸ MIR PUIG, C. (2018). *‘Capítulo VII: Los permisos de salida. Derecho Penitenciario: El cumplimiento de la pena privativa de libertad’*, Ed. Atelier, Barcelona, p.202.

²⁹ En: <https://2019.vlex.com/#vid/15355313>. Consultado el 14/01/2020.

³⁰ En: <https://2019.vlex.com/#vid/185559>. Consultado el 05/02/2020.

reeducación y reinserción al contribuir a lo que hemos denominado la ‘corrección y readaptación del penado’

3. FINALIDAD Y NATURALEZA JURÍDICA.

Los permisos de salida ordinarios cumplen con una doble finalidad: Por un lado, garantiza a los reclusos un contacto periódico con la sociedad (lo cual ayuda a minimizar los efectos psicológicos negativos del encerramiento forzoso).

Por otro lado, llevan a cabo una finalidad preventiva, al preparar a los internos para su vida en libertad (como expresa el artículo 47 de la LOGP). Esto se relaciona directamente con el artículo 25.2 de la CE, el artículo 1 de la LOGP, y el 2 del RP, que defienden que esta finalidad gira en torno a la reinserción y reeducación de los internos, y para tratar de impedir, por tanto, que éstos vuelvan a ser sujetos peligrosos en la sociedad.

También vemos que instituciones como el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia apoya esta doble finalidad. Son muy interesantes sentencias tales como ‘SSTC 137/2000, de 29 de mayo’³¹, donde en su fundamento jurídico tercero, expresa ‘*la posibilidad de conceder permisos de salida se conecta con una de las finalidades esenciales de la pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción social (artículo 25.2 CE.), de forma que todos los permisos de salida cooperan potencialmente a la preparación de la vida en libertad del interno*’. En el mismo sentido, también las sentencias ‘STC 204/1999, 8 de noviembre de 1999’³², donde afirma que la finalidad de los permisos es estar orientados a la preparación de los internos para la vida en libertad. O la STC 19/1988, de 16 de febrero de 1988³³ que establece que los permisos tienen como finalidad ‘*la corrección y readaptación del penado*’.

En definitiva, son un instrumento imprescindible para llegar a alcanzar esta doble finalidad, y realmente eficaz, con muchos argumentos a su favor respaldando su uso y concesión.

En cuanto a la naturaleza de los permisos, en un primer momento, fueron configurados como una ‘recompensa’ para incentivar el buen comportamiento. Así lo disponía el artículo 109 del

³¹ En: <https://2019.vlex.com/#vid/143107>. Consultado el 11/02/2020.

³² En: <https://2019.vlex.com/#vid/146616>. Consultado el 12/02/2020.

³³ En: <https://2019.vlex.com/#vid/15033831>. Consultado el 12/02/2020.

decreto 2273, de 29 de julio de 1997.³⁴ Sin embargo, actualmente, la LOGP, distingue entre ‘recompensas’ (situadas en el Capítulo V del Título II ‘Del Régimen Penitenciario’), y ‘permisos de salida’ propiamente dichos (en el Capítulo VI). Asimismo, el RP tampoco los incluye en su lista de recompensas del artículo 23.

El TC, sostiene que la relación lógica que hay entre los permisos y el mandato constitucional del artículo 25.2 CE, no basta para incluirlos en la categoría de derecho subjetivo, y aun menos en la de Derecho Fundamental, ya que aunque este artículo establezca que las penas privativas de libertad van encaminadas a la reeducación y reinserción, ese es un mandato dirigido al legislador penal y penitenciario, el cual no es fuente de derechos subjetivos, ni Fundamentales. Se trata pues, de una cuestión de ‘mera legalidad ordinaria’, así se establece en la ‘STC 88/1998, de 21 de abril’.³⁵

Si hablamos de ‘acto de concesión’³⁶, nos encontramos diversidad de opiniones; por ejemplo, Carmona Salgado³⁷ y González Cano³⁸, opinan que la aplicación de estos permisos es un acto de concesión de la Administración Penitenciaria, puesto que en artículo 47.2 LOGP, dice literalmente ‘*se podrán conceder permisos (...)*’. Pero Martínez Escamilla³⁹, por ejemplo discrepa, diciendo que no es una habilitación que se le pueda otorgar a la Administración, y que por tanto, no se puede prever aquí el carácter discrecional, ya que la finalidad de ellos, según la ley es la preparación para la vida en libertad. En consecuencia, deben estar condicionados al cumplimiento de los requisitos que se recogen legalmente establecidos. Sin embargo, Mir Puig⁴⁰ acredita que hay otras corrientes de pensamiento como la de Caffarena⁴¹, que sostienen que constituye un derecho subjetivo absoluto de los reclusos.⁴²

La mayoría de la doctrina, sin embargo, rechaza la argumentación de Caffarena y sostiene que son un derecho subjetivo condicionado al cumplimiento de unos requisitos legales y a que no

³⁴ El presente decreto, fue el que modificó parcialmente el Reglamento de Servicios de Prisiones de 2 de febrero de 1956. Ahora bien, éste último, más tarde, quedó derogado con el RP 1981, dejando solo vigente lo relativo a la redención de penas por trabajo.

³⁵ MIR PUIG, ‘*Derecho Penitenciario: El cumplimiento...*’, ob. cit. p.206.

³⁶ VEGA ALOCÉN, ‘*Los permisos...*’, ob. cit. p.61.

³⁷ CARMONA SALGADO, C. (1986). ‘*Los permisos de salida*’, *Comentarios a la legislación penal*, VI-2, Ed. Edersa, Madrid, p.708.

³⁸ GONZÁLEZ CANO, I. (1994). ‘*La ejecución de la pena privativa de libertad*’, *Tirant monografías*, núm. 22, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, p.357.

³⁹ MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. (2002). ‘*Los permisos ordinarios de salida: régimen jurídico y realidad*’, *Colección Estudios Jurídicos*, Ed. Edisofer, Madrid, pp.28-29.

⁴⁰ MIR PUIG. ‘*Derecho Penitenciario: El cumplimiento...*’ ob. cit. p.207.

⁴¹ MAPELLI CAFFARENA, B. (1983). ‘*Principios fundamentales del sistema penitenciario español*’, Ed. Bosch, Barcelona, pp. 200-201.

⁴² EDITORIAL CEP S.L. (2018). ‘*Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Temario. Vol. III*’, Madrid, p.222

exista además ninguna circunstancia subjetiva que impida que la medida se vea frustrada en sus objetivos. Esto es sostenido por autores como Bueno Arús⁴³, y Martínez Escamilla⁴⁴.

También, el TC se ha posicionado a favor de esta doctrina mayoritaria en reiteradas ocasiones. Un ejemplo de ello es la '*Sentencia 112/96, de 24 de junio*'⁴⁵, ya que en algunos casos, aunque se cumpla con todos los requisitos legales, podría ser perjudicial para el tratamiento teniendo en cuenta su personalidad delictiva, o bien porque existan variables cualitativas desfavorables que indiquen un posible quebrantamiento de condena.

La concesión, por tanto, atendiendo a esta naturaleza, requiere un juicio de valor de componentes objetivos y subjetivos, que ha de estar debidamente acreditado y justificado.

4. MODALIDADES

Nuestra legislación contempla dos modalidades de permisos de salida, los ordinarios (que son en torno a los que gira esta investigación), y los extraordinarios, regulados en los artículos 47.1 LOGP, y 155 RP. Otorgándose los extraordinarios por motivos excepcionales como fallecimiento, enfermedad grave, alumbramiento de la esposa, entre otros, durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad. Estos últimos no están reconducidos a ser un instrumento de preparación para la vida en libertad, sino que su finalidad es estrictamente humanitaria. Sin embargo, como ocurre en el caso contrario de los ordinarios, si que forman parte del tratamiento y tienen como función ir encaminados a la preparación para la vida en libertad - así se extrae textualmente del artículo 47.2 del RP-.

4.1 Permisos de salida ordinarios.

En este punto voy a tratar todas las cuestiones importantes relativas a los permisos ordinarios, modalidad sobre la cual versa este Trabajo de fin de grado.

⁴³ BUENO ARÚS, '*Los permisos de salida y las competencias...*' Ob. cit. p.16.

⁴⁴MARTÍNEZ ESCAMILLA, '*Los permisos ordinarios de salida...*' ob. cit. pp.28-29.

⁴⁵ En: <https://2019.vlex.com/#vid/15355313> Consultado el 20/02/2020.

4.1.1. Regulación

Actualmente, tras todos los antecedentes históricos y legales que han motivado y dado lugar a la aparición de los permisos de salida ordinarios, se encuentran regulados en la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 de 26 de septiembre en su título II (Del Régimen Penitenciario), Capítulo VI (permisos de salida), artículos 47 y 48, y en el Reglamento Penitenciario (RD 190/1996 de 9 de febrero), título VI (De los permisos de salida), artículos 154 a 159.

4.1.2 Requisitos para su concesión

Existen, por una parte, una serie de requisitos objetivos los cuales son de necesario y obligatorio cumplimiento, ya que en caso contrario ni siquiera cabe considerar que su concesión vaya a ser posible.

Estos requisitos son principalmente cuatro y se desglosan en:

a) Clasificación en segundo o tercer grado de tratamiento

En primer lugar, deberá el penado estar clasificado en segundo o tercer grado de tratamiento: en nuestro sistema penitenciario, los penados se clasifican mediante un sistema de grados. Ésta es una consecuencia directa de modificar el sistema progresivo (anteriormente mencionado), hacia el modelo actual de individualización científica⁴⁶, puesto que da una mayor flexibilidad al poder clasificar al futuro penado en el régimen que le sea más acorde a sus circunstancias particulares -a excepción de iniciar el internamiento directamente con un régimen de libertad condicional-, ello se extrae del artículo 72.3 LOGP. Por tanto, el Equipo Técnico procede a realizar la clasificación inicial, apoyándose en la base legal del artículo 103.3 del RP, donde se explica que el protocolo de clasificación deberá contener la propuesta razonada de grado y el programa individualizado del tratamiento. No podemos tratar de tener un programa que sea uniforme para todos los reclusos porque cometeríamos un error al intentar ajustar en uno mismo a personas con diferentes circunstancias ya sean personales, sociales, vitales, rasgos psicológicos, tipos de antecedentes, medio social del que proviene y al

⁴⁶ El sistema de individualización científica, hace referencia al modelo penitenciario de ejecución que seguimos actualmente, tal y como se expresa en el artículo 72.1 LOGP, el cual se basa en la clasificación en distintos grados de tratamiento tras haberse hecho efectiva la correspondiente clasificación mediante los estudios realizados al recluso pertinentes para ello. Cada régimen cuenta con unos modelos diferentes de vida adaptados a las necesidades que precise cada uno. Es individualizado puesto que la forma de cumplir condena se diseña de forma personalizada para cada interno; y científico ya que es llevado a cabo mediante métodos y formas de estudio científicos y es analizado por especialistas en materias de éste área.

que se prevea que regrese, historial familiar, o duración de las penas. Por lo que, esto va a ayudar a satisfacer las necesidades y carencias tanto laborales como culturales o profesionales que presente el individuo.⁴⁷

En definitiva, son una serie de factores que divergen en cada uno de ellos y por eso hace necesaria esta característica de flexibilidad del tratamiento, adecuándolos en el grado pertinente en función de su peligrosidad y evolución.

De este modo, los penados que se encuentran bien en el segundo grado de tratamiento⁴⁸, -encaminados a acceder al régimen abierto-, o bien clasificados en el tercer grado de tratamiento⁴⁹, -preparándose ya para adaptarse a una vida en libertad-, son los sujetos a los que se les podría conceder permisos ordinarios de salida, siempre que reuniesen el resto de requisitos necesarios. A mi parecer, este derecho es totalmente necesario para ellos, ya que además, sirve como apoyo al tratamiento penitenciario que les concierne.

Por otro lado, esto nos lleva a conectarlo inevitablemente con la prohibición del disfrute de estos permisos a condenados en primer grado de tratamiento, ya que son personas que presentan una peligrosidad extrema y que son incapaces de adaptarse al régimen ordinario y mucho menos aún al abierto. En vista de esto, sería muy arriesgado conceder estos permisos en el régimen cerrado contando con que ya existen una serie de antecedentes de que concederlos conduce en numerosos casos a su fracaso. Esto se puso de manifiesto cuando el RSP (modificado parcialmente por el Decreto 2273, de 29 de julio de 1977) si los autorizaba, aunque con las limitaciones de un máximo de cuarenta y ocho horas, que más tarde se limitó en las Órdenes Circulares de la DGIP de 21/04/78 y de 04/10/78 a un máximo de dieciocho días por año, estableciéndose en la última Orden su excepcionalidad.⁵⁰

Por ello, ante la experiencia sufrida con esta situación legal, se tomó la decisión -en vista de la real y efectiva inviabilidad de concederlos al régimen de primer grado-, de prohibirlos. Me

⁴⁷ VEGA ALOCÉN. '*Los permisos...*', ob. cit. p.72.

⁴⁸ Estar clasificado en segundo grado de tratamiento supone estar sometido a un régimen ordinario en el cual los reclusos presentan unas circunstancias personales que son compatibles con poder llevar a cabo una convivencia normal, pero sin embargo aun no reúnen las características necesarias para vivir completamente en semi-libertad.

⁴⁹ Tercer grado de tratamiento hace referencia a estar sometido a un régimen abierto, es decir, que el penado por sus circunstancias particulares reúna una serie de características que lleven a considerar que ya está preparado para llevar a cabo un tratamiento en semi-libertad, donde podrá disfrutar de salir durante el día pero ingresar por la noche otra vez. Existen diferentes modalidades de disfrutar de este régimen, según la ayuda que precise cada individuo. Por una parte encontramos el general, donde se pretende maximizar las capacidades de inserción social; el restringido, que está enfocado hacia personas con importante trayectoria delictiva, o comportamientos peligrosos, limitándoles las salidas al exterior o maximizando el control; y la modalidad con mecanismos de control, como pueden ser los dispositivos telemáticos.

⁵⁰ MIR PUIG. '*Derecho penitenciario. El cumplimiento...*', ob. cit. p.208.

apoyo en la *STC 2/1997, de 13 de enero*⁵¹, donde se establece que, los permisos son ‘*un estímulo a la buena conducta, a la creación de un sentido de la responsabilidad del interno y con ello al desarrollo de su personalidad*’ por lo que, como extraemos de esta información no sería razonable concedérselo a un penado que se encuentre en primer grado, ya que está en ese régimen porque aun no es capaz de integrarse en uno de convivencia con los demás reclusos o representa un manifiesto peligro que puede dar lugar a consecuencias graves; en base a esto, carecería de sentido concedérselo como estímulo a la buena conducta o por la responsabilidad adquirida porque evidentemente no la hay. También se menciona en esta sentencia que ‘*constituyen una vía fácil de eludir la custodia*’, argumento añadido para evitar concedérselos a reclusos de este grado que no presentan aun las características requeridas, ni están preparados.

O la *STC 88/1998, de 21 de abril de 1998*⁵², en la que argumenta denegar un permiso de este tipo considerando la idoneidad del momento ‘*para acometer el comienzo de la preparación para la vida en libertad*’ y como he explicado, un recluso de primer grado no está aun preparado para esto.

Hemos llegado a la mejor opción en mi opinión, puesto que tenemos que tratar de reconducir al penado a la reeducación y resocialización pero progresivamente, y concederle este tipo de permisos cuando realmente se considere que se está preparado para su disfrute. Ello encaminado al éxito de su tratamiento, que de ninguna forma tendrá validez si él quiebra este permiso y la repercusión que tiene es un castigo aún mayor. Así como también tratar de velar por la seguridad de los ciudadanos, es decir, debemos asegurarnos bien, previa introducción a un recluso en la sociedad nuevamente, por la grave repercusión que podría tener el hacerlo antes del tiempo estimado necesario.

Otro caso que nos atañe, es si se deberían conceder o no a los presos preventivos, donde si que está prevista para ellos la efectiva realización de esta concesión con fundamento en el artículo 159 del RP, siempre previa aprobación de la Autoridad judicial correspondiente.

Si nos fijamos en el *Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Coruña de 20/09/2010*⁵³, versa sobre si procede la autorización de un permiso extraordinario para un interno que se halla en calidad de preso preventivo. A lo largo de este Auto, se menciona

⁵¹ En: <https://2019.vlex.com/#vid/15355211> Consultado el 28/02/2020.

⁵² En: <https://2019.vlex.com/#vid/15354892> Consultado el 01/03/2020.

⁵³ MARQUÉS HARO, A. (2016). ‘*Jurisprudencia Penitenciaria 2000-2015*’. Ed, Ministerio del Interior-Secretaría General Técnica, p.565.

textualmente que efectivamente *‘el artículo 48 de la LOGP, se atribuye en el caso de presos preventivos la competencia para otorgar los permisos de salida a que se refiere el artículo anterior (tanto ordinarios como extraordinarios) a la autoridad judicial correspondiente de la que dependan’*

Por lo que, a pesar de versar el auto sobre la concesión de un permiso extraordinario, nos despeja de la incertidumbre afirmando que en efecto procede para permisos tanto ordinarios como extraordinarios la concesión por parte de las autoridades correspondientes.

Sin embargo, discrepando, nos encontramos con el *Auto de la Audiencia Provincial de Soria de 22/03/99*⁵⁴, donde le deniegan la concesión a un preso preventivo con fundamento en la *STC 19/1999 de 22 de febrero*, la cual establece que los internos en situación de prisión provisional no pueden obtener permisos de salida. Argumentan que el hecho de ser provisional es una medida cautelar de carácter personal cuya finalidad está encaminada a salvaguardar la presencia física del penado para que se haga efectivo el cumplimiento de su condena. Por ello, se deduce que, los permisos de los que no están vetados los internos preventivos son los extraordinarios, ya que son para circunstancias excepcionales y se conceden con las medidas pertinentes en cada caso.

A mi juicio, si que es correcta la interpretación de su concesión si nos basamos en el artículo 159 del RP, que cita textualmente *‘los permisos de salida regulados en este capítulo...’*, y el capítulo al que hace referencia con esto es al VI, titulado *‘De los permisos de salida’*, en el que vienen redactados tanto el artículo 154 (permisos ordinarios), como el 155 (permisos extraordinarios), por lo que, en base a su tenor literal, entiendo que se extiende a los dos tipos de permisos.

Igualmente ocurre en el caso de la LOGP, que en cuyo capítulo VI con título *‘Permisos de salida’*, trata los extraordinarios en el artículo 47.1, y los ordinarios en el 47.2., establece en el artículo 48 que *‘los permisos a que se refiere el artículo anterior, podrán ser concedidos asimismo a internos preventivos, con aprobación de la autoridad judicial correspondiente’* Por lo que, extraemos que según la regulación legal de ésta ley también es lícito proceder a su concesión.

También, discrepando de lo que dice el Tribunal Constitucional en su *Sentencia 19/1999 de 22 de febrero*, mencionada anteriormente, opino que los presos preventivos deberían tener

⁵⁴ MARQUÉS, HARO, *‘Jurisprudencia Penitenciaria...’*, ob. cit. p.493.

derecho igualmente a la concesión de éstos siempre y cuando se pudiese encajar en los estándares de la peligrosidad permitida para concederlos, así como que en base a sus rasgos psicológicos, y circunstancias personales y sociales, no apuntasen a que el hecho de concedérselos iba a conllevar consecuencias desastrosas, o incluso llevase aparejada la alarma social. En el caso de que esto fuese valorado favorablemente mediante estudios de profesionales, no contemplo problema alguno en concederlo, puesto que, al fin y al cabo siguen el mismo régimen de vida que los presos ya condenados, y esto les haría caer en una discriminación al concedérselos a unos y a otros no. Esta posición es defendida también por autoras como Carmona Salgado⁵⁵, que se muestra a favor de la concesión de estos permisos, ya que explica que cuando la prisión preventiva es prolongada, coinciden todos los inconvenientes y perjuicios de la pena privativa de libertad en ella, y sin embargo, ninguna ventaja.⁵⁶

Así que, si realmente no representasen peligro efectivo, si se les deberían conceder en aras a que no pierdan completamente el contacto con la sociedad. De este modo, esta finalidad enfocada a recuperar su vida en libertad y con la sociedad nuevamente, comenzaría al principio de su tratamiento y así sería más favorable, ya que al no ser peligrosos, una vez que se decidiese cuál iba a ser su régimen, no los condenarían al cerrado, por lo que, tendrían igualmente derecho a estos permisos.

En cambio, en el caso de que estando en el régimen preventivo sí demostrasen esa peligrosidad e inadaptación a la vida social y en libertad, veo suficientemente justificado en base a salvaguardar el orden público y la seguridad ciudad, que le sea denegado.

También debemos dar su importancia a los penados no clasificados: existe cierta discrepancia puesto que si nos atenemos al tenor de los artículos correspondientes a los permisos ordinarios de la LOGP, y RP, establece que es para los '*condenados en segundo y tercer grado*', es decir, no mencionada nada de los penados no clasificados, lo cual se puede considerar indirectamente que los excluye. O bien, la posición en la que nos pone la *Circular DGIP de 17 de noviembre de 1981*⁵⁷, donde recriminan que realmente esta cuestión no está clara puesto que teóricamente los presos penados y no clasificados aún no han cumplido el requisito objetivo de la cuarta parte de la condena -que es una condición *sine qua non* para su

⁵⁵CARMONA SALGADO, '*Los permisos de salida en Comentarios...*' ob. cit. p.718.

⁵⁶GARRIDO GUZMÁN, L. (1989). '*Los permisos de salida en el ordenamiento penitenciario español*', en revista *Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, no 2, San Sebastián, Nº2, Extraordinario. II Jornadas Penitenciarias Vasco-Navarras, p.72.

⁵⁷GARRIDO GUZMÁN, L. '*Cuaderno...*', ob. cit. p.72.

concesión, como más adelante se explicará-. Pero debemos tener en cuenta que la situación de ver qué régimen de vida se adapta mejor a las necesidades de cada recluso puede llevar una duración aparejada de hasta seis meses para realizar los estudios pertinentes, por lo que, esta situación de incertidumbre podría alargarse hasta el medio año. O bien puede darse que, -de ahí las discrepancias- el penado antes de que culmine su proceso de ser clasificado ya haya cumplido el cuarto de la condena pertinente para optar a esta concesión y, que aun cumpliendo este requisito objetivo necesario, no se le permitiese disfrutar de uno de estos permisos en base al tenor de los artículos de la LOGP y del RP. Es por ello, por lo que esta Circular contempla la opción de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria, en virtud a sus competencias, pueda concederlos.

A favor de esto, tenemos doctrina como la de VEGA ALOCÉN, quien se posiciona a favor de la concesión ya que si no, se incurriría en una discriminación frente a los condenados clasificados en segundo y tercer grado, así como también se vulneraría el principio de igualdad del artículo 14 de la CE.⁵⁸

Por último, en cuanto a su concesión a los extranjeros, nos encontramos argumentos a favor de avalar su concesión, como la *Regla 70.3 relativa a los Permisos Penitenciarios de la Recomendación R (87)3 del Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa de 12 de Febrero de 1987*: la cual versa: ‘*Los ciudadanos extranjeros no deberán ser excluidos del beneficio de los permisos penitenciarios únicamente por razón de su nacionalidad*’

En base a avalar esta concesión, nos encontramos jurisprudencia donde efectivamente le han concedido un permiso de salida a un extranjero como el *Auto de la AP de Madrid 1869/04 de 25 de junio*⁵⁹. En este Auto, se establece que el penado ha cumplido prácticamente la mitad de la condena, observa buena conducta y además está paliado por la acogida de una prestigiosa institución, por todo lo cual, a pesar de haber un innegable miedo del riesgo de fuga, citan que ‘*no puede caerse en la tentación de dramatizar hasta el extremo el riesgo de la fuga*’ y en vista de que se cumplen los requisitos legales, se lo conceden.

Otro ejemplo, es el *Auto de la AP 834/04*⁶⁰, donde el penado iba a cumplir las tres cuartas partes de la condena, y se consideraba que sería favorable conceder este permiso puesto que

⁵⁸ MIR PUIG, ‘*Derecho penitenciario. El cumplimiento...*’, ob. cit. p.208.

⁵⁹ MARQUÉS HARO, ‘*Jurisprudencia Penitenciaria...*’, ob. cit. p.320.

⁶⁰ MARQUÉS HARO, ‘*Jurisprudencia Penitenciaria...*’, ob. cit. p.320.

‘la eficacia retributiva y preventiva de la pena está en muy buena parte corregida’ y además, cuenta con la presencia en España de su hermana y con el aval de una asociación.

Como vemos, ambos casos mencionados versan sobre la concesión de un permiso de salida a un extranjero, donde podemos observar que al cumplir los requisitos legales se lo conceden, sin discriminación alguna por la nacionalidad.

Por lo tanto, siempre que concurren el resto de requisitos legales no se podrá discriminar a los extranjeros para su concesión, a excepción de extranjeros indocumentados que se nieguen a ser documentados.⁶¹

b) Extinguir una cuarta parte de la condena

Actualmente, es de obligatorio cumplimiento este requisito objetivo. Sin embargo, mientras estaba en vigor el *Decreto 2273 de 29 de julio de 1977*, al ser considerados los permisos meras recompensas para premiar su buena conducta y actitud, se entendía que un buen comportamiento podía ocurrir en cualquier momento, y por tanto, se elogiaba indistintamente del momento en que sucediese. De ahí, que este Decreto no estableciese un periodo mínimo de cumplimiento para la concesión de estos permisos.

Tras esto, con la *Orden Circular de la DGIP de 21 de abril de 1978*, se comenzó a establecer unos límites mínimos de tiempo antes de poder disfrutar, concretamente en su apartado 2D se exigía que transcurriesen al menos 60 días desde el ingreso en prisión.

El límite que actualmente está vigente, ‘haber extinguido, al menos la cuarta parte de su condena’, fue incluido por primera vez en la *Orden Circular de la DGIP de 4 de octubre de 1978* en su apartado II. 2º.

Pero al ocurrir este cambio, surgieron ciertos problemas de jerarquía⁶², ya que era una Orden Circular la que trataba de imponer un contenido contrario a lo que en la redacción del *Decreto 2273* existía, lo cual incurriría en una vulneración al principio de jerarquía normativo de los artículos 9.3 CE, y 2.2 CC.

⁶¹ Así se extrae del *Criterio 41 ‘permisos de salida para internos extranjeros’ de la XII Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria sobre criterios de actuación, conclusiones y acuerdos*. Madrid, enero 2003.

⁶² Jerárquicamente, el Decreto, norma con rango de ley emanada del poder ejecutivo -Gobierno-, es superior a la Orden Circular, que pertenece al grupo de los ‘reglamentos’. Una norma de rango inferior, nunca puede contrariar lo que disponga una norma de rango superior.

Poco tiempo después, el *Proyecto de Ley Penitenciaria*, en septiembre de 1978, asumía el requisito que la Orden Circular intentaba implantar como propio, redactándolo así en el artículo 47.2. Finalmente este límite existente actualmente -cumplir un cuarto de condena- fue aprobado, plasmándose así en el artículo 47.2 LOGP.⁶³

Una vez finalizada esta discrepancia del tiempo legal necesario a transcurrir y quede fijado el límite de esa cuarta parte, surgen cuestiones sobre cómo hacer el cálculo. Será de aplicación el artículo 193 RP, mediante el cual, en el cálculo, al recluso se le incluyen la totalidad de las condenas que esté cumpliendo.

Con la entrada en vigor de la *LO 7/2003 de 30 de junio de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas*, se reformó el artículo 78 CP.⁶⁴ Esto fue muy relevante, ya que en el artículo 76 CP, se establece el máximo de cumplimiento efectivo e la condena, que hace referencia al triplo de la pena más grave, y que podían ser un máximo de veinte años de condena.⁶⁵

En la redacción del artículo 78 se extrae que si a consecuencia de las limitaciones a las que de lugar el artículo 76, la pena a cumplir fuese inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, se podrá acordar que los cálculos del tiempo mínimo necesario -un cuarto- para conseguir acceder a la concesión de permisos, se realice sobre la totalidad de la suma de las penas.

Es aquí cuando en el apartado tres del presente artículo, se establece que será el Juez de Vigilancia Penitenciaria quien podrá entrar a valorar la existencia de un pronóstico favorable de reinserción, -oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias, y el resto de partes-, podrá decretar que lo que se le aplique sea el régimen general de cumplimiento, es decir, realizando los cálculos sobre la pena ya limitada.⁶⁶

⁶³ VEGA ALOCÉN, 'Los permisos...', ob. cit. p.118.

⁶⁴ MIR PUIG 'Derecho penitenciario. El cumplimiento...', ob. cit. p.211.

⁶⁵ Éste límite de veinte años, no es un límite fijo, pues el propio artículo 76 contempla una serie de excepciones, como son: a) un máximo de veinticinco años cuando el sujeto ha sido condenado por dos o mas delitos y alguno está penado con una pena de prisión de hasta veinte años; b) Un máximo de treinta años de condena si ha cometido un delito con una pena aparejada superior a veinte años; c) Cuarenta años de cumplimiento efectivo cuando el sujeto haya cometido dos o más delitos con pena superior a veinte años; d) Un máximo de cuarenta años si el sujeto ha sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y alguno de ellos conlleve una pena superior a veinte años. Y e) El sujeto condenado por dos o más delitos y a uno de ellos al menos le corresponde el castigo de prisión permanente revisable, se calculará conforme los artículos 92 y 78 bis de la presente ley.

⁶⁶ Lo voy a explicar mejor materializando esta teoría en un ejemplo:

Imaginemos un reo condenado por siete delitos, cada uno de ellos llevando aparejado una pena privativa de libertad de tres años cada uno, lo que sumaría un total de veintitún años de condena. Esto, es lo que llamaríamos

Por lo tanto, vemos que cumplir el cuarto de la condena para poder optar a la concesión de permisos es, como dice Fernández Aparicio⁶⁷, es el único requisito realmente objetivo, ya que no es algo que dependa de valoración subjetiva alguna por parte de una autoridad (como bien puede ser el observar buena conducta, o incluso el hecho de valorar las circunstancias personales para clasificarlo en su correspondiente grado).

Ahora bien, este requisito tan objetivo, como explica Fernández Aparicio, también tiene su parte de valoración discrecional en sentido de qué cifra escoger para realizar los cálculos en base a un pronóstico favorable de reinserción, como se ha explicado anteriormente.

Otro caso que debo destacar es el de los autores de ciertos delitos que para poder optar a la concesión de estos permisos no será suficiente con que superen una cuarta parte de la condena, puesto que, debido a la inminente peligrosidad de sus actos o personalidad, precisan de un tratamiento especial.

Estos son: los condenados a prisión permanente revisable⁶⁸. Tratamos con sujetos de una grave trayectoria delictiva, de tal modo que en aras de extremar la seguridad, el CP en su artículo 36.1 establece que los condenados a este régimen deberán cumplir unos plazos diferentes para poder llegar al disfrute de permisos de salida ya que, al tener la prisión permanente un carácter tan indefinido e indeterminable, únicamente sujeto su fin a la revisión

la refundición, una suma automática de las penas. Si realizamos los cálculos previstos por el artículo 76, vemos que el triple de la pena más grave es igual a nueve años (tres multiplicado por tres). Esto, es lo que llamaríamos el fenómeno de acumulación. No daría lugar a aplicar ninguna de las excepciones mencionadas en la referencia de arriba.

Por la regla del artículo 78, la mitad de las sumas de las condenas iniciales, da un total de diez años y medio de condena. (Veintiuno entre dos).

Como vemos, al ser menor la pena reducida que la mitad de la suma de las condenas iniciales se utilizarían los diez años y medio para los calcular el cuarto de condena necesario para la concesión de permisos.

Ahora bien, con base en el apartado tercero del artículo 78, podrían llegar a realizarse los cálculos con la cifra reducida por los límites del artículo 76, (es decir, los nueve años), si el Juez de Vigilancia Penitenciaria considerase que sí hay un pronóstico favorable de reinserción.

⁶⁷ En: <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/permisos-salida-70641300> Consultado el 03/03/2020.

⁶⁸ Hace referencia a la máxima pena privativa de libertad existente en España a día de hoy. Fue aprobada con fecha 26 de marzo de 2015. Solo puede imponerse en delitos de especial gravedad como son: crímenes de lesa humanidad; asesinato del rey de España o de un jefe de Estado extranjero que se encuentre en España; asesinato cometido en el seno de una organización criminal o terrorista; asesinato que es realizado tras la comisión de un delito contra la libertad sexual; asesinato de una persona menor de dieciséis años; y al condenado como reo de asesinato de más de dos personas.

Es muy indeterminada, ya que no se sabe cuando va a llevar su fin, -oscila entre los veinticinco y treinta y cinco años de condena-.

El método que se sigue es que de oficio, el Tribunal deberá cada dos años comprobar si conviene seguir en este régimen aunque también puede solicitar esta revisión el propio reo; ahora bien, si la respuesta es la desestimación, se empezará una cuenta atrás de un año, donde hasta que termine, no se podrá realizar una nueva solicitud.

Esta revisión, podría dar lugar a una puesta en libertad si se observa el cumplimiento de los requisitos del artículo 92.1 y 92.2 CP.

subjetiva que se les otorgue, sería imposible determinar cuándo han llegado a la realización de ese cuarto de condena exigido. Esos plazos son: cumplir doce años de condena en el caso de haber sido condenados por un delito del Capítulo VII del Título XXII del libro II del CP; y un mínimo de ocho años cumplidos en el resto de casos.

Nos encontramos con la problemática de que como bien dice Manuel Pacheco⁶⁹, *‘la prisión permanente revisable deja fuera de juego la reeducación y reinserción del reo, al quedar supeditadas a que éste vuelva a quedar ‘juzgado’ para que después de cumplir una parte de la condena se le otorgue o no el derecho a la libertad’*.

Con las penas de larga duración, lo que ocurre es que está demostrado que una pena privativa de libertad de más de quince años, produce efectos desocializadores irreversibles en el individuo,⁷⁰ por lo que, imaginemos hasta que punto devastador podrían llegar los efectos de esta incertidumbre de no saber realmente cuando van a considerar -en base a la revisión- que estás preparado para finalizar el régimen. Esta situación envuelve a los reos en una actitud desesperada al no estar sujetos a término, ya que no cuentan con el mayor incentivo -que es llegar a conseguir la libertad-, por tanto, esto da lugar a que en vista de esta tensión y malestar constante no hagan ni siquiera esfuerzos encaminados a la finalidad de resocialización y reeducación debido a la actitud negativa que toman. También, el hecho de no concederles ni siquiera permisos de salida hasta pasado tanto tiempo sin contacto con la sociedad, a mi parecer, es dar un paso atrás. Me reafirmo en el hecho de que en este tan largo periodo de tiempo se alejan aún mas de la vida cotidiana, y, al final, en vez de volverlo a introducir progresivamente lo tienen aislado demasiados años como para que siga con ilusión de llegar a cumplir ese fin, y ese aislamiento no produzca efectos psicológicos irreversibles.

El fin de resocialización de las penas, da lugar a la humanización de las cárceles, y en este caso ninguno de estos dos propósitos se está llevando a cabo, si no, convirtiendo esta prolongada estancia en un mero castigo.

En este sentido, criticando este carácter deshumanizado, nos encontramos jurisprudencia como la STS 7/3/1993 donde cita: *‘no puede conseguirse, o es muy difícil la consecución del mandato constitucional de resocialización cuando se produce, en función de las circunstancias, una excesiva exasperación de las penas. La legalidad constitucional debe*

⁶⁹ En: <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4914-prision-permanente-revisable/>
Consultado el 09/03/2020.

⁷⁰ ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L. (1999). *‘Sobre la resocialización de los presos terroristas’*. *Jueces para la democracia* no 35, pp. 28-30.

prevalecer sobre la ordinaria; una privación de libertad muy superior a treinta años, sería un tratamiento inhumano por privar de la oportunidad reinsertadora'.⁷¹

Es decir, ya la condena a prisión permanente revisable es regir al penado mediante un sistema inhumano, que ya en primer lugar falla a los principios del Estado de Derecho: legalidad y seguridad, por su indeterminación y a angustia que genera estar ahí sin conocimiento de una fecha fin. Y más inhumano aún es tratar de aislar al penado esa cantidad de años -tiempo necesario hasta que les conceden permisos de salida- sin contacto alguno con la sociedad.

Nuestro sistema está equivocado enormemente al aplicar este régimen, ya que con ello produce el efecto contrario. Según mi criterio, condenados por razones así, son los que más ayuda necesitan y al contrario a los que menos se les brinda. La situación mejoraría aumentando notoriamente la cantidad de apoyo, con tratamientos mucho más individualizados y realmente centrados en reconducir a la reeducación y resocialización y no someterlos a un régimen extremadamente restrictivo con multitud de consecuencias negativas sobre la persona del recluso, así como sobre sus posibilidades de reinserción.⁷²

El otro caso que cabe destacar, son los condenados a delitos de terrorismo: Para estos penados -excepto a los que les corresponde por ley cumplir prisión permanente revisable⁷³-, el régimen a seguir es el de la regla general de cumplir un cuarto de condena para la concesión de permisos⁷⁴.

En este caso, nos encontramos con la problemática y las discrepancias que origina del hecho de si realmente cabe llegar al fin pretendido de la resocialización con estos sujetos.

Pero si indagamos en la historia, vemos que existen casos de terroristas que si se han reinsertado, como 'Yoyes' o algunos presos de los GRAPOS, entre otros.⁷⁵

También, en la cuestión que nos atañe, -concesión de permisos penitenciarios-, si se han dado casos donde la respuesta ha sido positiva, como el *Auto de la Audiencia Nacional Sala de lo*

⁷¹ En: https://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=436 Consultado el 10/03/2020.

⁷² GALLEGO DÍAZ, M., CABRERA CABERA, P. J., RÍOS MARTÍN, J.C., y SEGOVIA, BERNABÉ, J.L. (2010). *Andar 1 km en línea recta: la cárcel del siglo XXI que vive el preso* (Vol. 3), Universidad Pontificia Comillas, p. 91.

⁷³ Es decir, a los condenados por haber cometido algún delito del *Capítulo VII del Título XXII del libro II del CP*.

⁷⁴ Evidentemente, existirán reos de delitos de esta categoría pero con la gravedad suficiente como para que debido a su situación precise atenerse al régimen cerrado de primer grado. Para éstos, siguiente la regla general del mandato de estar clasificado en segundo o tercer grado, le resultará aun vetada la concesión de permisos.

⁷⁵ ZUÑIGA RODRÍGUEZ, *'Sobre la resocialización...'*, ob. cit. pp.28-30.

*Penal de 07/05/2013*⁷⁶, en el cual conceden un permiso de salida a un condenado por terrorismo en vista de su cambio de actitud⁷⁷.

Por tanto, como dice Laura Zuñiga⁷⁸, *‘se puede, y se debe aspirar al ideal resocializador de los presos terroristas, porque es un Derecho Fundamental que la Administración Penitenciaria debe brindar’*

c) Observar buena conducta

El tercer requisito, es realmente bastante subjetivo, ya que a pesar de exigir no tener sanciones sin cancelar⁷⁹, también vemos que valorar la ‘buena conducta’ es un concepto jurídico indeterminado y sujeto a interpretación.

Asimismo, debemos tener en cuenta el artículo 260.1 RP, ya que se precisa que la persona no haya incurrido en una falta nueva grave o muy grave; aunque por ejemplo, en el supuesto de tener sanciones recurridas, no se deberá denegar el permiso solo por este motivo.⁸⁰

Según el *Criterio número 78 de los JVP en sus 16 reuniones celebradas entre 1981 y 2007*, expresa: *‘Para la concesión de un permiso no es necesario que todas las faltas disciplinarias estén canceladas’*. En el mismo sentido, el *Criterio 115*: *‘La existencia de faltas*

⁷⁶ MARQUÉS HARO, *‘Jurisprudencia Penitenciaria...’*, ob. cit. p.263.

⁷⁷ Éste cambio de actitud al que hago referencia, se contempla en una serie de requisitos plasmados en el artículo 62.6 de la LOGP, como son: satisfacer la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonios presentes y futuros; mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios terroristas, además de haber colaborado con las autoridades para impedir la producción de otros delitos, para atenuar los efectos de su delito, para identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, obtener pruebas, o bien impedir el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que perteneciese, pidiéndole así la realización de una declaración expresa de repudio de sus actividades y de abandono de la violencia, a la vez que una petición expresa de perdón a las víctimas. A la vez, acompañar de informes técnicos que acrediten que el preso sí está desvinculado de la organización terrorista, así como del entrono, colectivos ilegales y su colaboración con las autoridades.

⁷⁸ ZUÑIGA RODRÍGUEZ, *‘Sobre la resocialización...’*, ob. cit. p.30

⁷⁹ La cancelación de las faltas, contempla diferentes plazos según el tipo de delito del que estemos tratando. Así, para cancelar una falta muy grave, precisaremos del transcurso de seis meses; para las faltas graves, tres meses; y un mes para las leves. Todo ello a contar desde el cumplimiento de la sanción. De todas formas, estos plazos de cancelación, como cita el artículo 261 RP, podrán acotarse a la mitad de su duración si después de la sanción, pero antes de completarse, el penado es premiado con alguna recompensa del artículo 263.

⁸⁰ Si el penado en ese mismo momento se encuentra con la situación de tener recurrida una sanción ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, sí que se podrá conceder el permiso de salida; pero ahora bien, si esta sanción finalmente es confirmada, se tendrá en cuenta esta información para la concesión de futuros permisos.

disciplinarias sin cancelar, no es obstáculo para el estudio y tramitación por la Junta del Tratamiento del permiso de salida solicitado'.⁸¹

De la información de estos criterios, extraemos que, por lo tanto, se le puede dar el atributo de 'buena' a una conducta a pesar de tener faltas disciplinarias. Es por esto, por lo que explico que es un requisito en cierto modo 'subjetivo', ya que, como explica el *Auto 1034/99 AP Madrid Sección 5º de 8 de septiembre de 1999*: *'La conducta es una forma global de comportamiento que ha de enjuiciarse en conjunto, ponderando, y aun compensando lo positivo y lo negativo, de suerte, que es posible calificar una conducta de 'no mala', con quien ha cometido alguna infracción disciplinaria debiendo hacerse, caso por caso, un juicio de valor global(...), ha de establecerse en cada caso concreto para que la indeterminación genérica de la ley, se tome en la resolución específica e individualizada'*.

En el mismo sentido, José Cid Moliné⁸², explica que a pesar de que el requisito general de no tener sanciones disciplinarias sin cancelar sea aceptado y correcto en base a la seguridad y a tener una buena convivencia, pueden surgir controversias en casos concretos -donde entraría en juego la ponderación global del resto de factores también-. Ejemplo de ello, serían algunos casos en los que se pueda denegar un permiso por contemplar simples faltas no graves sin cancelar, se podría estar sacrificando el derecho a la reinserción social, y el fin de mantener una vida ordenada en prisión (a la que su conducta habrá afectado solo levemente).

Por tanto, José Cid sostiene mi argumentación, donde en los casos de mala conducta dudosa, en vez de denegarlo automáticamente, se deberá hacer el juicio de proporcionalidad pertinente -con las características tanto positivas como negativas-, y en base a la evolución del penado durante todo el tiempo de condena y no fijándonos simplemente en un momento puntual, -siempre que en base a la poca gravedad de la sanción, sea recomendable concederlo para el fin de la resocialización-.

d) Informe preceptivo del Equipo Técnico

Para que pueda dar comienzo el inicio del proceso de concesión, nos encontramos con el cuarto de los requisitos objetivos: el informe preceptivo del Equipo Técnico, tras el cual, la Junta de Tratamiento iniciará los estudios pertinentes para continuar el procedimiento.

⁸¹ MIR PUIG, 'Derecho penitenciario. El cumplimiento...', ob. cit. p.212.

⁸² CID MOLINÉ, J.C. (1998). 'Derecho a la Reinserción social: consideraciones a propósito de la reciente jurisprudencia constitucional en materia de permisos' *Jueces para la Democracia*, no 32, pp.36-49.

La realización de este informe, encuentra su cobertura legal en los artículos 47, párrafo dos de la LOGP; y artículos 154, párrafo primero y 156 RP, donde establece que podrá ser desfavorable por factores como su trayectoria delictiva, personalidad anómala, o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte probable el quebrantamiento de condena, que se cometan nuevos delitos o que su salida pudiese conllevar repercusiones negativas. Se extrae también así del punto dos del fundamento jurídico tercero de la *AAP LO 306/201*.⁸³

Este informe, según el punto dos del citado artículo, contendrá también ciertas condiciones y controles que se consideren adecuados en relación con el caso particular del reo, cuyo cumplimiento -o no-, se tendrá en cuenta para la concesión de posibles futuros permisos.

La información que recaba dicho “informe” se basa en la utilización de unos instrumentos de predicción del riesgo, integrados por la Tabla de Variables de Riesgo, y la Tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares (que abordaré en el apartado 4.1.5), que simplemente tratan de cumplimentar un impreso, trazando una cruz sobre la ocurrencia -o no- de ciertos criterios denegatorios, que dicho impreso recoge en una lista.

Como vemos, este informe presenta un carácter subjetivo, ya que depende de la percepción y del juicio de valor que realice el equipo técnico. Por ello, a veces, cuando se decreta su denegación, el mayor problema es que puede generar ciertos descontentos y achacarlo a factores como la arbitrariedad y al mismo tiempo contribuyan a que exista inseguridad jurídica. En tal sentido se pronuncia RÍOS MARTÍN⁸⁴, declarando que ‘*la práctica de expresar los motivos de denegación del permiso en un modelo/tipo con todas las variables de riesgo es contraria a lo establecido en los artículos 17, 24.1 y 25.2CE*’.

4.1.3 Duración

En lo que respecta a la duración de los permisos, la normativa anterior a la actual LOGP, en concreto, el *decreto 2273, de 29 de julio de 1977*, se establecía, en su artículo 109.2 apartado c) una duración mínima del disfrute de permisos para todos los penados en horas, y en su apartado d), en días.

⁸³ En: <http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/8863360/Asesinato/20190813>. Consultado el 15/03/2020.

⁸⁴ RÍOS MARTÍN, J.C. (2014). ‘*Manual de ejecución penitenciaria. Defenderse en la cárcel*’, 7ª edición, Ed. Colex, Madrid, p. 264.

Tras entrar en vigor la LOGP, a pesar de no especificar una duración mínima, solo mantiene el antecedente de la concesión de permisos por días, quedando derogados los inferiores a veinticuatro horas; es decir, toma el ‘día’ como unidad de medida. Esto es debido a dos razones: en el artículo 47.2 LOGP se fija en siete días la duración máxima, por lo que, se debería emplear la misma escala temporal; y que la delimitación del órgano competente para otorgar los permisos se establece en función del número de días de duración del permiso, tal y como mencionan los artículos 76.2i) LOGP y 161.2 RP.⁸⁵

En cuanto a su duración máxima, también se han producido cambios en la regulación: el decreto anteriormente nombrado, en su artículo 109.2 d) y 109.5, hacía una distinción de los reclusos por grados, permitiendo así permisos de hasta 48 horas para el primer grado; de 72 horas y excepcionalmente de una semana para el segundo y tercer grado, y de 72 horas para los preventivos.

Tras la modificación que da paso a la LOGP, queda plasmado en su artículo 47.2, que la duración de estos permisos será de ‘*hasta siete días*’ para los penados que cumplan los requisitos, dejando fuera del acceso a estos a los clasificados en primer grado como novedad ante las regulaciones anteriores.

En cuanto al límite de días máximo anual, surgieron cambios -reflejados en la siguiente tabla-, conforme las sucesivas regulaciones desde la entrada en vigor del decreto mencionado, el cual no imponía ningún límite máximo.

	PRIMER GRADO	SEGUNDO GRADO	TERCER GRADO
Orden Circular 21 de abril 1978	18	24	36
Orden Circular 4 de octubre 1978	18	24	36
Proyecto e Ley General Penitenciaria 15 septiembre 1978	NO	36	48
Ley Orgánica General Penitenciaria 1979	NO	36	48
Reglamento Penitenciario 1996	NO	36	48

⁸⁶

⁸⁵ VEGA ALOCÉN, ‘Los permisos...’, ob. cit. p.101.

⁸⁶ VEGA ALOCÉN, ‘Los permisos...’, ob. cit. p.108.

Actualmente, se regula en los artículos 47.2 LOGP y 154.1 RP el límite anual de 36 días para los condenados en segundo grado y 48 para los de tercero.

De tal manera, conforme al apartado segundo del artículo 154 RP, la distribución se realizará en dos semestres, permitiendo el disfrute de 18 y 24 días para el segundo y tercer grado respectivamente en cada uno de ellos.

Otra regla general relevante, es que esa distribución se realiza en porciones de 7 y 6 días cada 2 meses para el tercer y segundo grado respectivamente.⁸⁷

4.1.4 Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión comienza mediante una solicitud del penado por instancia dirigida al Director del Centro. Deberá incorporar pruebas y motivos que apunten a que se debería conceder el permiso.

Para continuar, se requiere el Informe preceptivo del Equipo Técnico (explicado anteriormente en el apartado 4.1.2.4), y, tras esto, se procedería a valorar el riesgo que supondría la concesión mediante una Tabla de Variables de Riesgo, y una de concurrencia de circunstancias peculiares. Ambas serán abordadas en el próximo apartado.

En cuanto a la concesión, la Junta de Tratamiento (con la propuesta del Equipo Técnico), acuerda conceder o denegar el permiso. En caso de que sea afirmativo, se elevará el acuerdo de concesión junto con el Informe del Equipo Técnico y documentación complementaria al Juez de Vigilancia Penitenciaria, si a quien hay que autorizar el permiso es a un interno en segundo grado y de duración superior a dos días (en base al artículo 76.2 i) LOGP); a la SGIP, para la autorización de permisos inferiores a dos días de internos en segundo grado, o a los de tercer grado cual sea su duración; o al Juez o Tribunal a cuya disposición está el preso preventivo.

La concesión puede aparejar ciertas condiciones como: presentarse en comisaría, contacto telefónico con el Centro Penitenciario, acompañamiento familiar, o prohibición de acudir a

⁸⁷ JUANATEY DORADO, C. (2016). *‘Manual de Derecho penitenciario’*, Ed. Iustel, p.187.

determinados lugares, entre otros. Si el preso fuese reo por violencia de género, se deberá comunicar a la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno.⁸⁸

Si por el contrario se le deniega, se le notificará la resolución al penado informándole de su derecho a recurrirlo en vía de queja ante el JVP.

4.1.5. Instrumentos de predicción del riesgo

En este apartado, voy a realizar una explicación acerca de cómo predice la autoridad penitenciaria el riesgo que podría suponer la concesión de los permisos, y los instrumentos en los que se apoya para su realización.

Una vez efectuado el estudio de los requisitos objetivos, se procede a valorar una serie de factores puramente subjetivos, ya que quedan totalmente a juicio y percepción de la autoridad que lo valora.

Al tratarse de una valoración de conceptos tan indeterminados, soporta una gran crítica, en base a la gran subjetividad de la que se recubren, que produce un choque contra la seguridad jurídica.

Otro problema que confluye es su rango normativo insuficiente, ya que la exigencia de la observación de estas circunstancias no aparece regulada en la LOGP; simplemente se menciona en el artículo 160.1 RP, lo que obliga a consultar la *Instrucción 1/2012 SGIP de permisos de salida y salidas programadas*⁸⁹, donde aparecen.⁹⁰

En España, todos los centros penitenciarios que son gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, utilizan los dos métodos o medidores de riesgo que voy a explicar a continuación, para hacer una valoración de cuán conveniente es autorizar estos permisos: Las Tablas de Variables de Riesgo, y las Tablas de Concurrencia de Circunstancias Peculiares. Ambas vienen referenciadas en la Instrucción 1/2012 como: *‘herramientas que*

⁸⁸ BUENDÍA RUBIO, M^a.C. *‘La relación de los internos con el mundo exterior’*. En: <https://ficip.es/wp-content/uploads/2018/08/Buend%C3%ADa-Rubio.-Comunicación-1.pdf>, consultada el 17/03/2020.

⁸⁹ Aunque su primera redacción fue -conjunta-, en la *Instrucción 1/1995 de 10 de enero, sobre el estudio y tramitación de los permisos de salida*, entraron en vigor en la *Instrucción 22/1996 de 16 de diciembre* (ya derogada), tras la aprobación del RD 1996.

⁹⁰ VEGA ALOCÉN, *‘Los permisos...’*, ob.cit. pp.148-149.

*aportan información esencial, que no debe ser nunca obviada, sino conocida y trabajada por los profesionales, para la toma de decisión de concesión del permiso’.*⁹¹

a) Las Tablas de Variables de Riesgo (TVR)

A pesar de que existen pocos estudios que prueben la real utilidad de las denominadas tablas de variables de riesgo – TVR-, cabe destacar el que realizó Miguel Clemente Díaz⁹² en 1993. Consistió en una investigación de validación y depuración de la TVR, en el cual se introdujeron las circunstancias que daban a entender que serían de mayor peso en cuanto al no reintegro o comisión de delitos durante el disfrute del permiso. Para su elección, se basó en realizar una comparación entre las variables que sirven para el pronóstico de la resolución de los equipos de observación y tratamiento, y las que conjeturan el riesgo de realizar un uso no debido del permiso. La investigación, -dirigida por Clemente-, se delegó al departamento de Psicología Social de la Universidad Complutense. Ésta versó sobre la realización de un estudio empírico acerca de la predicción del quebrantamiento de los permisos de salida. Tras la realización de éste, se llegaron a unas conclusiones, las cuales dieron lugar a la redacción de la *Instrucción 1/1995*.⁹³

De este modo, las TVR recogen una serie de los factores más influyentes para el éxito o fracaso de la concesión, con el fin de tratar que no se produzcan quebrantamientos de condena.

A continuación, vamos a ver un ejemplo de una TVR, junto con las diez variables que las conforman: extranjería, drogodependencia, profesionalidad, reincidencia, artículo 10, ausencia de permisos, deficiencia convivencia, lejanía y presiones internas.

⁹¹ GÓMEZ LÓPEZ, MARÍA DEL ROSARIO y RODRIGUEZ MORO, L., ‘*Los permisos ordinarios de salida...*’ ob. cit. p. 403.

⁹² CLEMENTE DIAZ, M. (1993). ‘*Validación y depuración de la Tabla de Variables de Riesgo en el disfrute de Permisos de Salida*’, Madrid: Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

⁹³ CRUZ MÁRQUEZ, B. y MOYA GUILLEM, C. (2017). ‘*Concesión de permisos de salida al agresor de género*’, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. p.5.



Interno:

I. LA PERSONA	II. LA ACTIVIDAD DELICTIVA	III. LA CONDUCTA PENITENCIARIA	IV. EL PERMISO
1 Extranjería Valor: <input type="checkbox"/>	3 Profesionalidad Valor: <input type="checkbox"/>	5 Quebrantamientos Valor: <input type="checkbox"/>	8 Deficiencia convivencial Valor: <input type="checkbox"/>
2 Drogodependencia Valor: <input type="checkbox"/>	4 Reincidencia Valor: <input type="checkbox"/>	6 Artículo 10 Valor: <input type="checkbox"/>	9 Lejanía Valor: <input type="checkbox"/>
		7 Ausencia permisos Valor: <input type="checkbox"/>	10 Presiones internas Valor: <input type="checkbox"/>

Puntuación X de la fórmula:

Puntuación A de la fórmula:

Puntuación B de la fórmula:

Puntuación final de RIESGO = (A / B) x 1000 :

Puntuación baremada de riesgo:

Significación cualitativa de la puntuación baremada:

VºBº

EL SUBDIRECTOR DE TRATAMIENTO

Cada una de ellas se puntúa de 0 a 3 (dependiendo del grado de concurrencia) y, luego, tras el empleo de un algoritmo interno ('ecuación de riesgo'), obtendríamos la puntuación global, mediante la cual se muestran una serie de porcentajes, y cada uno hace referencia a un nivel de riesgo. Siguiendo este procedimiento, los distintos niveles de riesgo son los siguientes: riesgo muy bajo (5%), riesgo bajo (10-15%), riesgo normal (20-35%), riesgo elevado (40-55%), riesgo bastante elevado (60-75%), riesgo muy elevado (80-95%), y riesgo máximo (100%).⁹⁴

Estas TVR, no se deben tomar por sí solas como instrumento de denegación de los permisos, pero sí deben tener gran influencia directa. Los riesgos que en ellas se prevén tienen que atenderse al caso concreto y de acuerdo con una valoración global de todas las circunstancias concurrentes⁹⁵, para seguirse garantizando así la individualización del proceso según las circunstancias personales del penado.

b) Tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares (CCP)

Para completar la valoración realizada con las TVR, es necesario ponderar otras circunstancias que pueden llevar a un mal uso del permiso.

⁹⁴ FÉREZ MANGAS, D., y ANDRÉS PUEYO, A. (2018). 'Eficacia predictiva en la valoración del riesgo del quebrantamiento de permisos penitenciarios.' La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, no 134, Ed. Wolters Kluwer, Barcelona, p.5.

⁹⁵ JUANATEY DORADO, C. 'Manual de...', ob. cit. p.192.

A continuación, se presenta un modelo de esta tabla, junto con las variables que la integran:

	CIRCUNSTANCIAS	DEFINICION	Presencia (x)
A	RESULTADO EN T.V.R.	Puntuación de riesgo igual o superior a 65 en la T.V.R.	<input type="checkbox"/>
B	TIPO DELICTIVO	Condenado por delito/s contra las personas o contra la libertad sexual.	<input type="checkbox"/>
C	ORGANIZACION DELICTIVA	Pertenencia a banda armada o de carácter internacional.	<input type="checkbox"/>
D	TRASCENDENCIA SOCIAL	Existencia de especial ensañamiento en la ejecución, pluralidad de víctimas o que éstas sean menores de edad o especialmente desamparadas.	<input type="checkbox"/>
E	FECHA 3/4 PARTES	Le reste más de 5 años para el cumplimiento de las 3/4 partes.	<input type="checkbox"/>
F	TRASTORNO PSICOPATOLOGICO	Alteraciones psicopatológicas de la personalidad en situación descompensada, con mal pronóstico o con ausencia de apoyo exterior.	<input type="checkbox"/>

Las circunstancias que aquí se incluyen, fueron incorporadas por la *Instrucción 22/1996*.

Actualmente, la *Instrucción 1/2012*, por su parte añadió dos nuevas medidas: La existencia de resoluciones administrativas o judiciales de expulsión, y la comisión de delitos de violencia de género como tipo delictivo específico.⁹⁶

Además, en noviembre de 2003, se añadió la circunstancia de ‘situación de la responsabilidad civil de los internos’, la cual fue remitida a los Centros Penitenciarios por la Subdirección General de Gestión Penitenciaria.⁹⁷

Cabe destacar que la *Recomendación R (87)3*, del Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa, adoptado por el Comité de Ministros el 12 de febrero de 1987, como la *Recomendación R (82)16*, demandan ‘que se conceda el permiso penitenciario en la más amplia y medida posible, y con la mayor frecuencia posible’⁹⁸

⁹⁶ JUANATEY DORADO, C. ‘Manual de...’, ob. cit. p.192.

⁹⁷ VEGA ALOCÉN, ‘Los permisos...’, ob. cit. p.148.

⁹⁸ En: <https://webs.ucm.es/info/eurotheo/normativa/permisos.htm#2>. Consultado el 17/03/2020.

5. CONCLUSIONES

Con esta investigación, he pretendido explicar y defender la cuantiosa importancia de la existencia y de la concesión de los permisos de salida ordinarios.

Como se ha puesto de manifiesto, desde tiempo atrás se están tratando de orientar los sistemas penitenciarios -tanto nacional como internacionalmente-, hacia una perspectiva más humana y de respeto a los derechos de los cuales son titulares los penados. Es por esto, por lo que se producen ciertas reformas que han ido evolucionando en el tiempo, como son los permisos de salida. Con ellos se pretende que no se deje cerrada la puerta a la esperanza del penado y ofrecerle de esta manera ayudas y estímulos que le permitan progresar hacia la reinserción. El disfrute de estos hace posible la preparación del condenado hacia su puesta en libertad de nuevo, de una forma progresiva. En el caso contrario, el hecho de introducirlo en la sociedad otra vez, sin haber tenido ciertas tomas de contacto con el exterior controladas previamente, daría lugar a consecuencias negativas que retrasarían los objetivos del tratamiento.

Los permisos son un modo de paliar las consecuencias negativas que presenta la vida en prisión, como por ejemplo, su alejamiento de la vida en sociedad, así como de la asunción de responsabilidades. El hecho de vivir encarcelado produce en el sujeto una cierta infantilización, al ser despojado de su autonomía a la hora de tomar decisiones básicas en la vida cotidiana. Ejemplos de esto son la determinación de la hora para realizar las comidas, cómo organizarse, o a dónde ir (al verse -evidentemente- limitado su derecho de libertad ambulatoria). Por este motivo, estos permisos son de vital importancia, ya que, al disfrutar de ellos, les da una cierta visión de como está avanzando la sociedad durante el tiempo en el que él está aislado. Además, producen indirectamente una mejora en su comportamiento en prisión, ya que cuentan con el incentivo de que, si cumplen este requisito, junto con los demás exigidos, podrán optar a su concesión.

Por otra parte, cabe hacer alusión a la vida de los reclusos, bajo un régimen acorde a las circunstancias personales de cada uno en el establecimiento penitenciario y su tratamiento. Ello, debe ir encaminado a la evolución hacia una actitud de respeto individual y social. La finalidad de esto es que se produzca una resocialización tal que, tras su salida, el penado viva respetando la ley penal. Por lo tanto, es crucial la concesión de los permisos en todas las ocasiones posibles. Estos se encuentran encaminados a la resocialización y reeducación, no

dejando lugar a la resignación del penado ante su falta de libertad. Se deberán tratar de forma que sean un aliciente para mejorar su actitud y comportamiento, y que, junto con el tratamiento correspondiente, no solo no tome una actitud de víctima, sino que asuma y aprenda del hecho causal.

Sin embargo, no todo lo que rodea a los permisos responde a motivos tan humanitarios, ya que existen unos determinados problemas jurídicos relativos a la consideración y a la regulación en cuanto a la concesión de estos. Por un lado, nos encontramos con la dicotomía acerca de cómo considerarlos, ya que como he explicado anteriormente, existe cierta controversia de si su naturaleza debería ser considerada derecho subjetivo o no. La doctrina que impera -la mayoritaria- es la que sigue el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, idea que apoyan muchos autores. Estos permisos, por tanto, en la práctica, son considerados como un derecho subjetivo condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos legales, y a la no ocurrencia de otros criterios subjetivos. No considero que imponerles esta categoría de derecho subjetivo, ligado a los criterios anteriormente mencionados, sea totalmente errónea. En cambio, desde mi punto de vista, se deben realizar ciertas matizaciones en cuanto a la manifestación de los criterios subjetivos. En este punto, es donde entra el juego el Informe preceptivo del Equipo Técnico, mediante el cual se decide la concesión de estos o no, en base a los instrumentos de predicción del riesgo. A estos instrumentos se les podría tachar de puramente subjetivos y arbitrarios ya que todo el poder de decisión de la concesión de estos reside en la resolución basada en la percepción de la autoridad que los realiza.

El hecho de utilizar esas tablas, hace los criterios igualitarios, ya que todos los penados que opten a la concesión de los permisos son medidos por los mismos parámetros, y esto hace que un posible reproche sobre la falta de la igualdad de medir las circunstancias, sea improcedente. Si bien es cierto que estos instrumentos -TVR y CCP- reducen la dificultad del proceso a unos simples parámetros, que, a mi juicio, resultan bastante incompletos. Tras haber realizado esta investigación, toda la información recabada me lleva a concluir que se está errando en la forma de predecir el riesgo. No pretendo decir con esto que esas tablas deban ser objeto de eliminación, sino que se deberían operativizar todas sus variables contenidas, de manera que ganen objetividad para determinar si procede la concesión. Es decir, tratar de dar un paso más allá y reformar de esta manera el modo de realizar la valoración del riesgo, profundizando en todos y cada uno de los criterios, y, a la par, reformularlo de manera que se puedan contemplar las excepciones. Excepciones en el sentido de que, al igual que no procede

utilizar el mismo tratamiento para todos los reclusos, motivo por el cual nuestro sistema sigue un programa individualizado de tratamiento, debemos tener en cuenta que tampoco todas las variables recogidas (por mucho que se concrete su valoración con el fin de propiciarle una perspectiva más objetiva) van a incidir por igual en todos los reclusos. Por lo tanto, lamentable e inevitablemente, resulta complicado recoger esas excepciones de una manera que podríamos considerar ‘tasada’ (ya que nunca se van a poder concretar todas las variables en cuanto a circunstancias personales de los reclusos que vamos a tener). Por consiguiente, tras éstas, se escondería un cierto carácter subjetivo, pero siempre encaminando este proceso a cerciorarnos de que la decisión se vea respaldada en ciertos parámetros (como pueden ser el grado de afectación de esa circunstancia según el recluso), a pesar de que la resolución de si procede otorgar los permisos o no corresponde a la autoridad que valora las condiciones. Estos parámetros ahondan más en las circunstancias de cada persona, reflejando así el sistema individualizado de tratamiento. Paralelamente, se deben otorgar unas ciertas garantías de que se ha llegado a esa decisión en base a una pormenorizada motivación. Es decir, critico el uso de los instrumentos de predicción del riesgo tal y cómo están regulados y se utilizan en la práctica hoy en día, pero defiendo que, con una cierta concreción de las circunstancias, y valorando las excepciones, podrían conseguirse mejores resultados. Además, al mismo tiempo, se eliminarán las connotaciones de arbitrariedad y discrecionalidad que se les achaca a la Administración Penitenciaria por cómo lleva a cabo a día de hoy esa valoración.

Por último, para mejorar la eficacia de los permisos penitenciarios ordinarios, se podrían combinar con educación individualizada en habilidades sociales de manera que, esa salida al exterior esté respaldada por un mejor conocimiento de relaciones interpersonales y de formas de llevarlas a cabo de una manera más adecuada a las normas sociales. Esto lo abogan los mejores resultados obtenidos por los equipos multidisciplinarios en los últimos años. Es decir, las ventajas de los permisos de salida son innegables, pero sus beneficios pueden potenciarse con una enseñanza especializada para cada caso de tal forma que se reduzca en mayor medida la reincidencia en los errores del pasado. Lo importante para lograr esa efectiva reinserción, por tanto, es el tomar conciencia de lo ocurrido, por medio del aprendizaje, ya que como decía Concepción Arenal: ‘Abrid escuelas, y se cerrarán las cárceles’.

6. BIBLIOGRAFÍA.

- AYUSO VIVANCOS, A. (2011). '*Visión crítica de la reeducación penitenciaria en España*', Madrid, Ed. Nau Llibres. ISBN: 978-84-7642-820-7
- BUENO ARÚS, F. (1986). '*Los permisos de salida y las competencias de los Jueces de Vigilancia*', III Reunión de JPV, Madrid. ISSN: 0211-8815
- CARMONA SALGADO, C. (1986). '*Los permisos de salida*', *Comentarios a la legislación penal*, VI-2, Madrid, Ed. Edersa.
- CID MOLINÉ, J.C. (1998). '*Derecho a la Reinserción social: consideraciones a propósito de la reciente jurisprudencia constitucional en materia de permisos*'. *Jueces para la Democracia*, no 32. ISSN: 1133-0627
- CLEMENTE DIAZ, M. (1993). '*Validación y depuración de la Tabla de Variables de Riesgo en el disfrute de Permisos de Salida*'. Madrid: Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
- CRUZ MÁRQUEZ, B; MOYA GUILLEM, C. (2017). '*Concesión de permisos de salida al agresor de género*' en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. ISSN: 1695-0194
- EDITORIAL CEP S.L. (2018). '*Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Temario. Vol. III*'. Madrid. ISBN: 9788468186665
- FÉREZ MANGAS, D Y ANDRÉS PUEYO, A. (2018). '*Eficacia predictiva en la valoración del riesgo del quebrantamiento de permisos penitenciarios*'. *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, no 134, Barcelona, Ed. Wolters Kluwer. ISSN: 1697-5758
- GALLEGO DÍAZ, M., CABRERA CABERA, P. J., RÍOS MARTÍN, J.C., y SEGOVIA, BERNABÉ, J.L. (2010). '*Andar 1 km en línea recta: la cárcel del siglo XXI que vive el preso (Vol. 3)*', Universidad Pontificia Comillas. ISBN: 978-84-8468-288-2
- GARCÍA BLASCO, J.C., (1977). '*Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos del Consejo de Europa*' *REP*, núm. 216-219, DGIP, Madrid.
- GARRIDO GUZMÁN, L. (1989). '*Los permisos penitenciarios*', *REP extra 1*, Madrid.
- GARRIDO GUZMÁN, L., (1989). '*Los permisos de salida en el ordenamiento penitenciario español*', en revista *Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de*

Criminología, no 2, San Sebastián, N°2, Extraordinario. II Jornadas Penitenciarias Vasco-Navarras. ISSN: 0210-9700

- GARRIDO GUZMÁN, L. (1983). *Manual de ciencia penitenciaria*, Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, Ed. Edersa.
- GÓMEZ LÓPEZ, MARÍA DEL ROSARIO Y RODRIGUEZ MORO, L. (2015). *Los permisos ordinarios de salida: antecedentes, regulación vigente y reflexiones críticas*. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, no 19. ISSN: 1138-039X
- GONZÁLEZ CANO, I. (1994). *La ejecución de la pena privativa de libertad*, Tirant monografías, núm. 22, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch.
- GUTIÉRREZ VEGA, Z., y KENT, V. (2001). *Una vida al servicio del humanismo liberal*, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Ed. Thema.
- JUANATEY DORADO, C. (2016). 'Lección 11: Derechos Penitenciarios de los internos en su relación con el exterior: Permisos de salida y salidas programadas' en *Manual de Derecho penitenciario*. Ed. Iustel, ISBN: 978-84-9890-303-4
- KENT, V. (1976). *Victoria Kent: una experiencia penitenciaria* en Revista Tiempo de Historia.
- LEGANÉZ GÓMEZ, S. (2009). *Clasificación penitenciaria, permisos de salida y extranjeros en prisión: nuevo régimen jurídico*, Madrid, Ed. Dykinson, ISBN: 978-84-9849-417-4
- MAPELLI CAFFARENA, B. (1983). *Principios fundamentales del sistema penitenciario español*, Barcelona, Ed. Bosch. ISBN: 84-7162-898-8
- MARQUÉS HARO, A. (2016). *Jurisprudencia Penitenciaria 2000-2015*. Ed, Ministerio del Interior- Secretaría General Técnica.
- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. (2002). *Los permisos ordinarios de salida: régimen jurídico y realidad*, Colección Estudios Jurídicos, Madrid, Ed. Edisofer.
- MIR PUIG, C. (2018). *Capítulo VII: Los permisos de salida. Derecho Penitenciario: El cumplimiento de la pena privativa de libertad*. Barcelona, Ed. Atelier. ISBN: 9788417466176
- RICO DE ESTASEN, J. (1956). *Un gran penitenciarista español: el coronel Montesinos*, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias penales. ISSN: 0210-3001
- RIOS MARTÍN, J.C., (2014). *Manual de ejecución penitenciaria. Defenderse en la cárcel*, 7a edición, Madrid, Ed. Colex, ISBN: 978-8483424070

- RODRIGO GARCÍA, A. (1988). '*Victoria Kent. Adelantada a la justicia*', *Revista Historia y vida*, no 244, Barcelona. ISSN: 0018-2354
- RODRÍGUEZ ALONSO, A. (2003). '*Lecciones de Derecho Penitenciario*'. Granada, Ed. Comares. ISBN: 9788484447603
- SALILLAS, R. (1906). '*Un gran penólogo español, el Coronel Montesinos*', Madrid, Ed. Eduardo Arias.
- SANZ DELGADO, E. (2008). '*Los orígenes del sistema penitenciario Español: Abadía y Montesinos*', en: *Marginalidad, cárcel, las 'otras' creencias: primeros desarrollos jurídicos de 'La Pepa'*. Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz.
- TELO NUÑEZ, M., ARENAL, C. y KENT, V. (1995). '*Las prisiones, vida y obra*', Madrid, Ed. Instituto de la mujer, Ministerio de Asuntos Sociales. ISBN: 84-799-117-0
- VEGA ALOCÉN, M. (2005). '*Los permisos de salida ordinarios*', Granada, Ed. Comares. ISBN:84-8444-160-1
- ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L. (1999) '*Sobre la resocialización de los presos terroristas*'. *Jueces para la democracia*, no 35.

ANEXO.

1. Referencias normativas.

- *Circular de Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 27 de noviembre de 1981.*
- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.
- *Criterios de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria de las reuniones Celebradas entre el 1981 y 2007.*
- España. Decreto-ley de 2 de febrero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prisiones, adaptado a la Ley de 15 de julio de 1954, de 2 de febrero de 1956. Boletín Oficial del Estado, 15 de marzo de 1956, núm. 75, pp. 1778-1817.
- España. Ley 1/1979, de 26 de septiembre de 1979, General Penitenciaria. Boletín Oficial del Estado, 5 de octubre de 1979, núm. 239, pp. 23180-23186.
- España. Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, de 24 de noviembre de 1995, núm. 281, pp.33987-34058.
- España. Ley 7/2003 de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Boletín Oficial del Estado, 1 de julio de 2003, núm. 156, pp. 25274-25278
- España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, 31 de marzo de 2015, núm. 77, pp. 27061-27176.
- España. Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Boletín Oficial del Estado, 23 de junio de 1981, núm. 149, pp.14357-14360.
- España. Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Boletín Oficial del Estado, de 15 de febrero de 1996, núm. 40, pp. 5380-5435.
- España. Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil. Gaceta de Madrid, 25 de julio de 1889, núm. 206, pp. 249-259.
- *Instrucción 1/1995 de 10 de enero, sobre el estudio y tramitación de los permisos de salida.*
- *Instrucción 1/2012 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de permisos de salida y salidas programadas.*

- *Instrucción 22/1996 de 16 de diciembre.*
- *Orden Circular de 13 de octubre de 1977.*
- *Orden Circular de 21 de abril de 1978.*
- *Orden Circular de 3 de febrero de 1978.*
- *Orden Circular de 4 de octubre de 1978.*
- *Real Decreto 2273/1997 de 29 de julio*
- *Recomendación 195(1959).*
- *Recomendación 73(5), de 19 de enero de 1973 sobre el conjunto de Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.*
- *Recomendación 82(16), de 24 de septiembre de 1982.*
- *Recomendación 87(3), de 12 de febrero de 1987 sobre las Reglas Penitenciarias Europeas.*
- *Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, de 1955.*
- *Resolución 62(2), de 1 de febrero de 1962.*

2. Referencias jurisprudenciales

- *Auto de la Audiencia Nacional. Sala de lo penal de 7 de mayo de 2013.*
- *Auto de la Audiencia Provincial 834/04.*
- *Auto de la Audiencia Provincial de Logroño 306/2019, de 4 de julio de 2019.*
- *Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 1869/04 de 25 de junio.*
- *Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, 1034/99, Sección 5º, de 8 de septiembre de 1999.*
- *Auto de la Audiencia Provincial de Soria, de 22 de marzo de 1999.*
- *Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Coruña, de 20 de septiembre de 2010.*
- España. Tribunal Constitucional. (Pleno). Sentencia núm. 19/1988, de 16 de febrero.
- España. Tribunal Constitucional. (Sala Primera). Sentencia núm. 88/1998, de 21 de abril.
- España. Tribunal Constitucional. (Sala Segunda). Sentencia núm. 112/1996 de 24 de junio.
- España. Tribunal Constitucional. (Sala Segunda). Sentencia núm. 115/2003 de 16 de junio.
- España. Tribunal Constitucional. (Sala Segunda). Sentencia núm. 137/2000 de 29 de mayo.
- España. Tribunal Constitucional. (Sala Segunda). Sentencia núm. 19/1999, de 22 de febrero.
- España. Tribunal Constitucional. (Sala Segunda). Sentencia núm. 204/1999 de 8 de noviembre.
- España. Tribunal Constitucional. (Sala Segunda). Sentencia núm. 2/1997, de 13 de enero.
- España. Tribunal Supremo. de 7 de marzo de 1993.

3. Páginas web

- En: <https://www.boe.es/>, último acceso 17/05/2020.
- En: <https://www.guiasjuridicas.es/Content/Inicio.aspx>, último acceso 29/04/2020.
- En: <https://2019.vlex.com/> - /, último acceso 10/05/2020.
- En: <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/>, último acceso 10/05/2020.
- En: <http://noticias.juridicas.com/>, último acceso 15/03/2020.
- En: <https://www.porticolegal.com/>, último acceso 16/03/2020
- En: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial, último acceso 15/03/2020
- En: <https://ficp.es>, último acceso 20/03/2020
- En: <http://www.interior.gob.es/>, último acceso 11/05/2020.
- En: <https://webs.ucm.es/info/eurotheo/normativa/permisos.htm> - 2, último acceso 20/04/2020